

CASO PCA No. 2009-23

**EN EL ARBITRAJE ANTE UN TRIBUNAL CONSTITUIDO DE ACUERDO CON LO
DISPUESTO EN EL TRATADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y LA
REPÚBLICA DE ECUADOR CON RELACIÓN AL FOMENTO Y LA PROTECCIÓN
RECÍPROCA DE INVERSIONES, FIRMADO EL 27 DE AGOSTO DE 1993 (EL “TRATADO”)
Y EN LAS REGLAS DE ARBITRAJE DE LA CNUDMI DE 1976**

ENTRE: -

- 1. CHEVRON CORPORATION (“Chevron”)**
- 2. TEXACO PETROLEUM COMPANY (“TexPet”)**

(ambos de los Estados Unidos de América)

Primer y Segundo Demandantes

- y -

LA REPÚBLICA DE ECUADOR

Demandado

Primer Laudo Parcial sobre el Tramo 1

con fecha 17 de septiembre del 2013

El Tribunal Arbitral:

Dr. Horacio A. Grigera Naón;

Profesor Vaughan Lowe;

V.V. Veeder (Presidente)

Secretario Administrativo: Martin Doe

TABLA DE CONTENIDO

<i>PARTE A: El Arbitraje – Tramo I</i>	04
<i>Introducción</i>	04
<i>Procedimiento</i>	04
<i>Alegatos Escritos</i>	05
<i>Declaración Testimonial Escrita</i>	05
<i>La Audiencia del Mes de Noviembre</i>	07
<i>Tramo II</i>	08
<i>PARTE B: Los Documentos Principales</i>	09
<i>Introducción</i>	09
(i) <i>El Contrato de Transacción de 1995</i>	09
(ii) <i>Liberaciones de Obligaciones Municipales y Provinciales de 1996</i>	13
(iii) <i>Acta Final de 1998</i>	14
<i>PARTE C: Los Casos Respectivos de las Partes</i>	16
<i>Introducción</i>	16
<i>El Caso de los Demandantes</i>	16
<i>Las Pretensiones de los Demandantes</i>	20
<i>El Caso del Demandado</i>	23
<i>Las Pretensiones del Demandado</i>	26
<i>PARTE D: Análisis y Decisiones del Tribunal</i>	28
<i>I: Introducción – Interpretación Legal</i>	28
(i) <i>Las Normas Pertinentes</i>	28
(ii) <i>La Declaración Pericial</i>	29

<i>(iii) Análisis – Interpretación Legal</i>	32
<i>Artículo 9.3</i>	33
<i>La Liberación de Obligaciones</i>	33
<i>Artículo 5</i>	35
<i>Artículo 9.4</i>	36
<i>Ambigüedad Legal</i>	37
<i>Decisiones – Interpretación Legal</i>	37
<i>II: Introducción – Efecto Legal</i>	37
<i>(i) Análisis – Efecto Legal</i>	38
<i>(ii) Artículo 19-2</i>	40
<i>(iii) Decisiones – Efecto Legal</i>	43
 <i>PARTE E: La Parte Operativa</i>	 45
 <i>APÉNDICE 1: El Contrato de Transacción de 1995 (Versión original en español)</i>	

PARTE A: EL ARBITRAJE – TRAMO I

1. *Introducción:* Este Laudo Parcial aborda la controversia entre las Partes con respecto a la interpretación legal y el efecto legal del Contrato de Transacción de 1995 celebrado entre el Segundo Demandante (“TexPet”) y el Demandado en su carácter de partes signatarias, del cual el Primer Demandante (“Chevron”) no era Parte signataria. Para permitir una referencia más fácil, se adjunta a este Laudo Parcial (Apéndice 1) una copia completa del Contrato de Transacción de 1995 en su versión original en español. Dado el idioma original de este Laudo Parcial, sólo por conveniencia, a continuación se incluyen referencias a su traducción al inglés, salvo donde se indica lo contrario.
2. Dado el estado de este Laudo Parcial como quinto laudo dictado en estos procedimientos arbitrales, no tiene sentido aquí reformular las partes formales establecidas en los laudos anteriores del Tribunal; y con fines de simplicidad, el Tribunal incorpora aquí por referencia la Parte I de su Tercer Laudo Provisional sobre Jurisdicción y Admisibilidad con fecha 21 de febrero del 2012.
3. *Procedimiento:* En resumen, el Tribunal aplicó el principio “*prima facie*”, adecuado a los temas de jurisdicción, y decidió en ese Tercer Laudo Provisional que la interpretación hecha por los Demandantes del Contrato de Transacción de 1995, si bien fuertemente controvertida por el Demandado, era por lo menos “seria”; pero el Tribunal no decidió finalmente en ese laudo sobre la interpretación o efecto del Contrato de Transacción de 1995 ni en un sentido ni en otro. En cambio, el Tribunal decidió, dado que ambas eran cuestiones mixtas relativas a las objeciones de jurisdicción controvertidas del Demandado en virtud de lo dispuesto en el Artículo VI (1) (a) del TBI y al fondo de los reclamos controvertidos por Chevron, unir la objeción de jurisdicción del Demandado al fondo de esos reclamos de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 21(4) de las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI.
4. Posteriormente, por medio de su Orden Procesal No. 10 de fecha 9 de abril del 2012, el Tribunal dividió el fondo de la controversia entre las Partes en dos partes, tituladas “Tramo I” y “Tramo II”. El Tramo I debía comprender temas legales preliminares que surgían del Contrato de Transacción de 1995, limitados a su interpretación legal y a su efecto legal aducidos por los

Demandantes y controvertidos por el Demandado, incluso (en particular) si Chevron es o no un “Exonerado” según el Contrato de Transacción de 1995 y el Artículo IV del Acta Final de 1998: Párrafos 2 y 3 de la Orden Procesal.

5. Dadas las complejidades de la controversia total entre las Partes y su naturaleza evolutiva a medida que continúa el arbitraje, el Tribunal también reconoció en la Orden Procesal No. 10 que podría no ser posible o apropiado decidir estas cuestiones preliminares de manera completa, lo cual requeriría al Tribunal diferir una o más decisiones para el Tramo II. Incluso en ese caso, sin embargo, el Tribunal reconoció que las Partes o el Tribunal no necesariamente duplicarían ni desperdiciarían ese tiempo ni ese gasto. Como se explica a continuación, el Tribunal ha decidido que no es apropiado decidir de manera completa en el Tramo I el cuál es el efecto legal del Contrato de Transacción de 1995, aplicando la interpretación legal decidida aquí por el Tribunal.
6. *Alegatos Escritos:* De acuerdo con las órdenes procesales del Tribunal, las Partes presentaron los siguientes alegatos escritos correspondientes al Tramo I (los primeros dos alegatos tienen fecha anterior a la Orden Procesal No. 10):
 - (i) Memorial de los Demandantes sobre el Fondo con fecha 6 de septiembre del 2010;
 - (ii) Memorial Complementario de los Demandantes sobre el Fondo con fecha 20 de marzo del 2012;
 - (iii) Memorial de Contestación del Demandado con fecha 3 de julio del 2012;
 - (iv) Memorial de Réplica de los Demandantes con fecha 29 de agosto del 2012; y
 - (v) Memorial de Dúplica del Demandado con fecha 26 de octubre del 2012.

Si bien las Partes presentaron, durante este procedimiento, otros alegatos escritos que hacen referencia a temas sobre los que se decidió en este Laudo Parcial, el Tribunal considera que sus respectivos casos escritos para el Tramo I bien pueden ser tomados a los fines actuales de los cinco alegatos antes mencionados.

7. *Declaración Testimonial Escrita:* Los Demandantes presentaron las siguientes declaraciones periciales por escrito correspondiente al Tramo I:
 - (i) Primer informe pericial del Dr. Enrique Barros (sin fecha);

- (ii) Primer y segundo informes periciales del Dr. César Coronel Jones con fecha 3 de septiembre del 2010;
- (iii) Primer informe pericial del Profesor Ángel R. Oquendo con fecha 2 de septiembre del 2010;
- (iv) Primer informe pericial del Dr. Gustavo Romero Ponce con fecha 3 de septiembre del 2010;
- (v) Segundo informe pericial del Dr. Enrique Barros con fecha 27 de agosto del 2012;
- (vi) Tercer informe pericial del Dr. César Coronel Jones con fecha 28 de agosto del 2012;
- (vii) Informe pericial del Profesor William T. Allen con fecha 27 de agosto del 2012;
- (viii) Segundo informe pericial del Profesor Ángel R. Oquendo con fecha 28 de agosto del 2012;
- (ix) Segundo informe pericial del Dr. Gustavo Romero Ponce con fecha 27 de agosto del 2012;
- (x) Tercer informe pericial del Dr. Enrique Barros con fecha 19 de noviembre del 2012;
- (xi) Cuarto informe pericial del Dr. Enrique Barros con fecha 19 de noviembre del 2012; y
- (xii) Cuarto informe pericial del Dr. César Coronel Jones con fecha 19 de noviembre del 2012.

8. Los Demandantes presentaron las siguientes declaraciones testimoniales por escrito de los hechos correspondientes al Tramo I:

- (i) La declaración testimonial del Sr. Frank G. Soler con fecha 27 de agosto del 2010;
- (ii) La primera declaración testimonial del Dr. Ricardo Reis Veiga con fecha 27 de agosto del 2012; y
- (iii) La segunda declaración testimonial del Dr. Ricardo Reis Veiga con fecha 28 de agosto del 2012.

9. El Demandado presentó las siguientes declaraciones periciales por escrito correspondientes al Tramo I:

- (i) Primer informe pericial del Profesor Roberto Salgado Valdez con fecha 1° de octubre del 2010;
- (ii) Primer informe pericial del Profesor Genaro Eguiguren con fecha 2 de julio del 2012;
- (iii) Segundo informe pericial del Profesor Roberto Salgado Valdez con fecha 2 de julio del 2012;
- (iv) Primer informe pericial del Profesor Gilles Le Chatelier con fecha 2 de julio del 2012;
- (v) Tercer informe pericial del Profesor Roberto Salgado Valdez con fecha 26 de octubre del 2012;
- (vi) Segundo informe pericial del Profesor Genaro Eguiguren con fecha 26 de octubre del 2012; y
- (vii) Segundo informe pericial del Profesor Gilles Le Chatelier con fecha 25 de octubre del 2012;

10. El Demandado presentó las siguientes declaraciones testimoniales escritas de los hechos correspondientes al Tramo I:

(i) Declaración testimonial del Sr. Giovanni Elicio Mario Rosania Schiavone con fecha 24 de octubre del 2012.

11. De acuerdo con lo ordenado por el Tribunal, las Partes también presentaron los siguientes informes periciales conjuntos:

(i) Informe pericial conjunto con fecha 6 de agosto del 2012 del Dr. Enrique Barros, del Dr. César Coronel Jones y del Profesor Roberto Salgado Valdez;

(ii) Informe pericial conjunto con fecha 7 de agosto del 2012 del Dr. Enrique Barros, del Dr. César Coronel Jones, del Profesor Genaro Eguiguren, del Profesor Ángel R. Oquendo y del Dr. Gustavo Romero Ponce; e

(iii) Informe pericial conjunto con fecha 7 de agosto del 2012 del Profesor Gilles Le Chatelier y del Profesor Ángel R. Oquendo.

12. *La Audiencia del Mes de Noviembre*: Los temas del Tramo I fueron argumentados por las Partes en la audiencia oral que tuvo lugar en Londres durante tres días, del 26 al 28 de noviembre del 2013, con la asistencia de intérpretes de inglés y español, grabada en transcripciones tanto en inglés como en español (la “Audiencia del Mes de Noviembre”). Las referencias incluidas a continuación corresponden a la versión en inglés de la transcripción textual de la Audiencia del Mes de Noviembre, y se interpretan como sigue: D1.10 significa el primer día en la página 10.

13. Los Demandantes y el Demandado estuvieron representados en la Audiencia del Mes de Noviembre por las personas mencionadas en la transcripción textual, y no tiene sentido incluir aquí una lista de estas personas con sus nombres, salvo en los siguientes casos: para los Demandantes, las presentaciones orales iniciales fueron hechas por el Sr. Hewitt Pate [D1.8], el Profesor Crawford [D1.12] y el Dr. Doak Bishop [D1.33]; para el Demandado, las presentaciones orales iniciales fueron hechas por el Procurador General García Carrión [D1.60] y el Profesor Douglas [D1.64]; para los Demandantes, las presentaciones orales finales fueron hechas por el Sr. Hewitt Pate [D3.471], el Profesor Crawford [D3.491 y D3.545] y el Dr. Doak Bishop [D3.522]; y para el Demandado, las presentaciones orales finales fueron hechas por el Dr. Luis Gonzáles [D3.555], el Dr. Tomás Leonard [D3.573] y el Dr. Eric W. Bloom [D3.594].

14. Los Demandantes ofrecieron tres testigos orales en la Audiencia del Mes de Noviembre: (i) el Dr. Ricardo Reis Vega [D2.244x, 247xx y 283xxx]; (ii) el Profesor Ángel P. Oquendo [D2.298x, 299xx y 376xxx]; y (iii) el Dr. Gustavo Romero Ponce [D2.381 y 383xx]. El Demandado ofreció dos testigos orales en la Audiencia del Mes de Noviembre: (i) el Sr. Giovanni Elicio Mario Rosania Schiavone [D1.96x, 104xx y 147xxx]; y (ii) el Profesor Genaro Eguiguren [D1.155x, 173xx y 219xxx].
15. *Tramo II*: A la fecha de este Laudo Parcial, las Partes están completado sus alegatos escritos correspondientes al Tramo II, que deben cumplirse antes del 29 de noviembre del 2013, y la audiencia oral del Tramo II se ha fijado para comenzar el 13 de enero del 2014.

PARTE B: LOS DOCUMENTOS PRINCIPALES

16. *Introducción:* Para comenzar, es necesario describir brevemente los tres principales grupos de documentos contractuales a los que se hace referencia a continuación: (i) el Contrato de Transacción de 1995, (ii) las Liberaciones de Obligaciones Municipales y Provinciales de 1996, y (iii) el Acta Final de 1998.
17. (i) *El Contrato de Transacción de 1995:* El 4 de mayo del 1995, el Demandado actuando a través de su Ministerio de Energía y Minas (aquí denominado por conveniencia “el Ministerio”) y a través de PetroEcuador como “una Parte” y TexPet actuando como “la otra parte”, inicialaron y firmaron un acuerdo escrito titulado “Contrato para la Ejecución de Trabajos de Reparación Medioambiental y Liberación de Obligaciones, Responsabilidades y Demandas” que, para facilitar su referencia, se denomina en este procedimiento arbitral como el “Contrato de Transacción de 1995”.
18. El Contrato de Transacción de 1995 fue hecho en papel con membrete del Ministerio con el escudo de armas del Demandado y fue firmado en nombre de ese Ministerio por el Ministro de Energía y Minas. También fue firmado por un alto funcionario de PetroEcuador y por dos representantes de TexPet (que actualmente, pero no en ese entonces, es propiedad indirecta de Chevron), uno de los cuales era el Dr. Ricardo Reis Vega, testigo de hecho en el Tramo I.
19. El Contrato de Transacción de 1995 establecía en los dos últimos párrafos de su preámbulo que TexPet aceptaba realizar el “Trabajo de Reparación Ambiental en consideración a que será liberada y descargada de todas sus obligaciones legales y contractuales y responsabilidades por el Impacto Ambiental resultante de las operaciones del Consorcio”. De acuerdo con el Artículo 1.3, el término “Impacto Ambiental” incluía: “[c]ualquier sustancia sólida, líquida o gaseosa presente o liberada en el ambiente a tal concentración o condición, cuya presencia o liberación causa o tiene el poder de causar daño a la salud de los humanos o al medioambiente”.
20. Como se contempla en el Memorando de Entendimiento de 1994 celebrado previamente entre las mismas partes signatarias (que debía ser reemplazado y quedaría anulado por el Artículo 9.6 y por el último párrafo del Anexo “A” del Contrato de Transacción de 1995), el Contrato de Transacción de 1995, sujeto a sus términos: (i) liberaba a TexPet de las demandas del Demandado y de PetroEcuador basadas

en el Impacto Ambiental (salvo las demandas relacionadas con el cumplimiento por parte del TexPet del Alcance del Trabajo); y (ii) establecía que TexPet quedaría liberado de toda otra responsabilidad ambiental una vez cumplidas las obligaciones de remediación descritas en ese Alcance del Trabajo.

21. El Artículo 1.12 del Contrato de Transacción de 1995 definió esa liberación en los siguientes términos: “La liberación, bajo las provisiones del Artículo V de este Contrato, de todas las obligaciones legales y contractuales y de la responsabilidad, frente al Gobierno y Petroecuador, por Impacto Ambiental resultante de las Operaciones del Consorcio, incluyendo cualesquiera demanda que tengan o puedan tener tanto el Gobierno como Petroecuador contra Texpet, como resultado de los Convenios del Consorcio”. El término “Operaciones del Consorcio” fue definido como “Aquellas operaciones de exploración y producción de petróleo llevadas a cabo de acuerdo con los convenios del Consorcio”, es decir, el Contrato de Concesión de 1973 (ibídem).
22. El Artículo 5.1 del Contrato de Transacción de 1995 (“Artículo V”) a su vez establecía (entre otras cosas) lo siguiente:

“A la fecha de suscripción de este contrato [es decir, el 4 de mayo del 1995], y en consideración al acuerdo de Texpet de realizar el Trabajo de Reparación Ambiental de acuerdo con el Alcance del Trabajo establecido en el Anexo A y el Plan de Acción de Reparación Ambiental, *el Gobierno y Petroecuador liberarán, absolverán y descargarán para siempre a Texpet, Texas Petroleum Company, Compañía Texaco de Petróleos del Ecuador S.A., Texaco Inc., y a todos sus respectivos agentes, sirvientes, empleados, funcionarios, directores, representantes legales, aseguradores, abogados, indemnizadores, garantes, herederos, administradores, ejecutores, beneficiarios, sucesores, predecesores, principales y subsidiarias (a las que se denominará “Las Exoneradas”) de cualquier otra demanda del Gobierno y Petroecuador en contra de Las Exoneradas por Impacto Ambiental, resultante de las Operaciones del Consorcio, a excepción de aquellas relacionadas con las obligaciones contraídas en este Contrato para la ejecución por Texpet del Alcance del Trabajo (Anexo A)...*”.

El Tribunal ha enfatizado en este caso el texto que resulta crítico para la interpretación controvertida que las Partes hacen del Contrato de Transacción de 1995, al cual el Tribunal necesariamente vuelve a continuación. Las “demandas” del Gobierno fueron abordadas en el Artículo 5.2.

23. El Artículo 5.2 del Contrato de Transacción de 1995 establecía:

“El Gobierno y Petroecuador entienden por demandas cualquiera y todas las demandas, derechos de demandas, deudas, embargos, acciones y multas por causas de orden común, de derecho civil o de equidad, basadas en contratos o hechos dolosos, causas de acción y penalidad constitucionales, estatutarias, regulatorias (incluyendo, pero no limitándose a causas de acción bajo el Artículo 19-2 de la Constitución Política de la República del Ecuador, Decreto No. 1459 de 1971, Decreto No. 925 de 1973, la Ley de Aguas, R.O. 233 de 1973, ORD No. 530 de 1974, Decreto No. 374 DE 1976, Decreto No. 101 de 1982 o Decreto No. 2144 de 1989, o cualquier otra ley o regulación de la República del Ecuador que sea pertinente), costos, juicios, liquidaciones, y honorarios de abogados (pasados, presentes, futuros, conocidos o desconocidos), que el Gobierno o Petroecuador tengan o puedan tener en contra de cada liberación relacionados de alguna manera con la contaminación, que exista o pueda surgir, directa o indirectamente, de las Operaciones del Consorcio, incluyendo, pero no limitándose, a consecuencias de todos los tipos de daños que el Gobierno o Petroecuador pudieran alegar con respecto a las personas, propiedad, negocios, reputaciones, y todos los otros tipos de perjuicios que se puedan medir en términos de dinero, incluyendo, pero no limitándose a transgresiones, molestias, negligencia, responsabilidad estricta, incumplimiento de garantía, o cualquier teoría o teoría potencial de recuperación”.

El Tribunal ha vuelto a enfatizar aquí el texto más crítico para la interpretación controvertida que las Partes hacen del Contrato de Transacción de 1995.

24. La referencia en el Artículo 5.2 al Artículo 19-2 de la Constitución Ecuatoriana (la Constitución de 1978 que entró en vigencia en 1979 y que luego fue enmendada y entró en vigencia modificada en 1995) significó una causa de acción disponible para el Demandado en virtud de lo dispuesto en el Título II, Sección 1 (Sobre los Derechos de las Personas/ de los Individuos¹) por medio del cual el Estado Ecuatoriano le garantizaba a cada persona, entre otras cosas (según la traducción al inglés): “...El derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza...”. El texto completo del Artículo 19-2 en español establece: “Sin perjuicio de otros derechos necesarios para el pleno desenvolvimiento moral y material que se deriva de la persona, el Estado le garantiza: El derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley establecerá las restricciones al ejercicio de determinados derechos o libertades, para proteger el medio ambiente”. La referencia al

Decreto	No.	374	de	1976
---------	-----	-----	----	------

¹ Los Demandantes traducen el término en español “las personas” como “people” o “persons” en inglés [D3.523] y el Demandado los traduce como “individuals” y “persons” [D1.74 y D3.580]. Según el punto de vista del Tribunal, estas diferencias en la traducción al inglés no son sustanciales para las decisiones tomadas en este Laudo Parcial.

significó una causa de acción disponible para el Demandado sobre la prevención y el control de la polución. La referencia a la Ley del Agua de 1973 y al Decreto No. 2144 de 1989 significaron causas de acción disponibles para el Demandado con respecto a los recursos y la contaminación del agua. La referencia a ORO No. 530 significó las Reglamentaciones para la Exploración y Exploración de Hidrocarburos del 9 de abril del 1974.

25. Las referencias a “el Gobierno” contenidas en los Artículos 1.12 y 5 del Contrato de Transacción de 1995, en lugar de referencias al Ministerio, se explica por el hecho de que el Contrato de Concesión de 1973 fue celebrado entre (entre otros) TexPet y el Gobierno del Demandado (que no obstante actuaba por medio del Ministerio) y del cual, según surge del Contrato de Transacción de 1995, la liberación estaba orientada, en gran medida, a resolver reclamos que surgían de ese Contrato de Concesión de 1973 (incluida su cláusula 46). Además, el Artículo 9.1 del Contrato de Transacción de 1995 con relación a las notificaciones cursadas en virtud de dicho Contrato identificaban al Ministerio como representante del Gobierno. En todo caso, el Ministerio, que formaba parte del Gobierno, actuó para el Gobierno al concluir el Contrato de Transacción de 1995 y, constitucionalmente, el Demandado por lo tanto debe ser tratado bajo el derecho ecuatoriano como parte signataria del Contrato de Transacción de 1995.

26. El Artículo 9.3 del Contrato de Transacción de 1995 contenía una disposición de “Contrato Completo”, a saber:

“Este Contrato contiene todos los términos y condiciones acordados por las Partes con respecto al Trabajo de Reparación Ambiental y con todos los asuntos que de alguna manera puedan afectar dicho Trabajo de Reparación Ambiental. No se considerará la existencia de ningún otro convenio, verbal o de otra índole, en relación con este Contrato o que comprometan a las Partes”.

27. El Artículo 9.4 restringió los beneficios a favor de “un tercero”, a saber (de acuerdo con las distintas traducciones al inglés hechas por las Partes en base a la versión en español)²:

Los Demandantes: “No se deberá inferir que este Contrato conferirá ningún beneficio a ningún terceros que no sean Parte de este Contrato, ni tampoco que proporcionará ningún derechos a ese tercero para hacer cumplir sus provisiones”.

² Como se mencionó, la primera traducción al inglés fue realizada por los Demandantes [D1.57-58] y la segunda fue realizada por el Demandado [D3.575]. Desde el punto de vista del Tribunal, estas diferencias no son sustanciales para sus decisiones en este Laudo Parcial.

El Demandado: “No se deberá inferir que este Contrato conferirá beneficios a terceros que no sean parte de este Contrato, ni tampoco que proporcionará derechos a terceros para hacer cumplir sus provisiones”.

El término “tercero” o “terceros” no estaba definido en el Contrato de Transacción de 1995.

28. El Anexo “A” del Contrato de Transacción de 1995 contenía el Alcance del Trabajo de Reparación Ambiental y Mitigación y Compensaciones Socioeconómicas con los que debía cumplir TexPet. Fue firmado por separado por las partes signatarias. La Sección VII.C del Anexo “A” establecía:

“C. Negociaciones con las Municipalidades de Lago Agrio (Nueva Loja), Shushufindi, Joya de los Sachas y Francisco de Orellana (Coca).

Sin perjuicio de lo acordado en este Alcance de Trabajo de reparación ambiental y en el Memorando de Entendimiento del 14 de diciembre de 1994, Texpet se compromete a continuar con las negociaciones con las Municipalidades arriba mencionadas, tendientes a establecer la participación de Texpet en la ejecución de obras en base a proyectos de agua potable y/o alcantarillado y letrización para las correspondientes cabeceras cantonales. Los resultados de estas negociaciones serán independientes del presente Alcance y del Contrato de Reparación Ambiental y de Liberación de Obligaciones que suscribirán las partes, ni afectarán la ejecución de dichos Alcance y Contrato.

Los trabajos que no pudieran ser cubiertos con los fondos resultantes de las negociaciones con Texpet serán complementados mediante la aplicación del Art. 3 del Decreto Ejecutivo 675 del 15 de abril de 1993, publicado en el Registro Oficial No. 174 del 22 de los mismos mes y año”.

29. El Contrato de Transacción de 1995 no contenía ninguna disposición expresa para ley o leyes aplicables, resolución de controversia o selección de foro. No obstante, es común entre las Partes (junto a sus respectivos peritos) que la ley ecuatoriana se aplique a su interpretación y efectos, y ese método acordado es aquí confirmado por el Tribunal a los fines de este procedimiento arbitral en virtud de lo dispuesto en el Artículo 33 de las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI.

30. (ii) *Las Liberaciones de Obligaciones Municipales y Provinciales de 1996*: Tal como está dispuesto en el Anexo “A” del Contrato de Transacción de 1995 (antes citado), TexPet luego resolvió diferencias con las cuatro municipalidades de la Región de Oriente (Sushufindi, Francisco de Orellana

(Coca), Lago Agrio y Joya de los Sachas), en virtud de acuerdos escritos celebrados con estas municipalidades, como así también con la Provincia de Sucumbíos y el consorcio de municipalidades del Napo (denominados conjuntamente en el presente, a los fines de referencia, las “Liberaciones de Obligaciones Municipales y Provinciales”). De acuerdo con estas seis resoluciones, cuatro de las cuales fueron aprobadas por los tribunales ecuatorianos debido a su naturaleza de diferencias litigiosas, TexPet, junto con las partes no signatarias (como se explica a continuación), fueron liberados de responsabilidad ante estas municipalidades por las actividades del Consorcio en el área de la concesión. El Demandado, incluido este Ministerio, no era parte signataria de estas Liberaciones de Obligaciones Municipales y Provinciales de 1996, que por supuesto fueron todas firmadas después del Contrato de Transacción de 1995. (El Contrato de Transacción de 1995 no fue aprobado por ningún tribunal ecuatoriano, que entonces no tenía naturaleza litigiosa entre las partes signatarias).

31. Las Liberaciones de Obligaciones Municipales y Provinciales establecían (entre otras cosas) una liberación en términos de algún modo diferentes del Artículo 5.1 del Contrato de Transacción de 1995. Por ejemplo, la quinta disposición de la Liberación de Obligaciones del 2 de mayo del 1996 otorgada por la Provincia de Sucumbíos se extendía a (según fue traducido del inglés): “ Texaco Petroleum Company, Texas Petroleum Company, Compañía Texaco de Petróleos del Ecuador, S.A., Texaco Inc., y cualquier otra compañía afiliada, subsidiaria o relacionada con ellas y a todos sus agentes, empleados, funcionarios, directores, representantes legales, aseguradores, abogados, garantes, herederos, administradores, contratistas, sub-contratistas, sucesores o predecesores”.
32. (iii) *El Acta Final de 1998*: El 30 de septiembre del 1998, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Transacción de 1995, el Demandado (actuando a través de su Ministerio de Energía y Minas), PetroEcuador, PetroProducción y TexPet firmaron el *Acta Final*, en la que certificaron que TexPet había cumplido con todas sus obligaciones en virtud del Contrato de Transacción de 1995 y, de acuerdo con sus términos, liberaron a TexPet de (según se especificaba) toda responsabilidad ambiental que surja de las operaciones del Consorcio.
33. El Artículo IV del Acta Final establecía (entre otras cosas) lo siguiente, en la traducción al inglés:

“ el Gobierno y PETROECUADOR proceden a liberar, absolver y descargar para siempre a TEXPET, Texas Petroleum Company, Compañía Texaco de Petróleos del Ecuador, S.A., Texaco Inc. y a todos sus respectivos agentes, sirvientes, empleados, funcionarios, abogados, indemnizadores, garantes, herederos, administradores, ejecutores, beneficiarios, sucesores, predecesores, principales y

subsidiarias, de cualquier demanda o reclamación del Gobierno de la República del Ecuador, PETROECUADOR y sus Filiales, por conceptos relacionados con las obligaciones adquiridas por TEXPET en el mencionado Contrato [el Contrato de Transacción de 1995]”.

El Tribunal nota que el texto contractual crítico en cuestión contenido en el Artículo 5.1 del Contrato de Transacción de 1995 es esencialmente el mismo que está contenido en el Artículo IV del Acta Final; y, por lo tanto, los temas relacionados con la interpretación y efectos de esta última son tratados aquí como los mismos temas con relación al Contrato de Transacción de 1995.

PARTE C: LOS CASOS RESPECTIVOS DE LAS PARTES

34. *Introducción:* Desde el punto del vista del Tribunal, como se explica más adelante en este Laudo Parcial, la interpretación controvertida de las Partes se basa en unas pocas palabras en español que resultan cruciales contenidas en el Artículo 5 del Contrato de Transacción de 1995 que debe interpretarse de acuerdo con las normas pertinentes del derecho ecuatoriano aplicables a la interpretación de los contratos. Si bien los materiales presentados por las Partes son voluminosos, los temas esenciales de interpretación legal, si bien tal vez son difíciles, son relativamente breves y poco complicados.
35. Dado también el enfoque limitado adoptado por el Tribunal en este Laudo Parcial con respecto a los efectos legales de esa interpretación de acuerdo con el derecho ecuatoriano, resulta innecesario aquí resumir en su totalidad los casos respectivos de las Partes con relación al Tramo I. En particular, como se explica con más detalle a continuación, el Tribunal no decide aquí el efecto legal total del Contrato de Transacción de 1995 (con el Acta Final de 1998) como se solicita en las pretensiones respectivas de las Partes, como se establece a continuación en esta Parte C.
36. No obstante, El Tribunal consideró el alegato y las pretensiones de las Partes con lujo de detalle; y no debería considerarse que la omisión en este caso de alguna referencia a alguna parte de esos casos significa lo contrario. Sin embargo, aparte de los temas y las pretensiones ya reservados al Tramo II y dado que parte de los temas del Tramo I quedan diferidos al Tramo II por decisión del Tribunal, no debería considerarse que alguna parte de ese caso que no sea abordada en el presente haya sido decidida de manera implícita por el Tribunal en un sentido o en otro en este Laudo Parcial.
37. *El Caso de los Demandantes:* En resumen, los Demandantes sostienen que, en virtud del derecho ecuatoriano, Chevron es un “Exonerado” de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 5.1 del Contrato de Transacción de 1995 y no es un “tercero” beneficiario excluido en virtud del Artículo 9.4 a quien se le impide ejercer plenamente sus derechos contractuales como Exonerado, directamente por sí o indirectamente a través de TexPet. Los Demandantes sostienen que Chevron, después de la “fusión triangular inversa” con Texaco Inc. (“Texaco”) entre el 15 de octubre del 2000 y el 1º de noviembre del 2001, se convirtió en propietario indirecto, controlante y última sociedad matriz de TexPet, pasando así a quedar comprendido dentro del significado del término en español “principales” enumerado para la liberación en el Artículo 5.1 del Contrato de Transacción de 1995. Los

Demandantes ponen de relieve que el Demandado sostiene el argumento contrario por primera vez en este procedimiento arbitral.

38. Los Demandantes afirman que Chevron, Texaco y TexPet fueron y siguen siendo sociedades separadas y que, si bien Chevron no es el “sucesor de los derechos” con respecto al pasivo de Texaco ni de TexPet, Chevron sostiene que el contexto del término “principales” en el Artículo 5.1 muestra una intención objetiva en virtud del derecho ecuatoriano de liberar a futuras controlantes (como Chevron) y no significa sólo un mandante en una relación de mandante y mandatario. Los Demandantes invocan tres puntos en particular para fundamentar su postura.
39. En primer lugar, una lectura “holística” del Artículo 5.1 revela que la intención objetiva de las Partes de liberar a las controlantes porque la lista larga y amplia de 22 categorías de Exonerados establece la intención de liberar ampliamente a todas las personas físicas y jurídicas que en alguna vez podrían ser acusadas de responsables por la conducta de TexPet, lo cual necesariamente incluye una futura controlante de TexPet. Por el contrario, con una lista tan extensa (incluyendo expresamente la controlante existente de TexPet, Texaco), no hay evidencia de este texto contractual de ninguna intención de excluir a ninguna futura controlante como Exonerado.
40. En segundo lugar, cuando se le agrega el término “subsidiarias” del Artículo 5.1, el uso de [la palabra] “principales” en el lenguaje común tanto legal como en negocios significa una controlante. Tal como se sostiene en el párrafo 222 del Memorial de Réplica de los Demandantes - Tramo I:

“Un análisis gramatical de la frase *principales* y *subsidiarias* revela su significado y su uso. Lingüísticamente, los términos *principales* y *subsidiarias*, tal como se los emplea en el Artículo 5.1, son sustantivos atributivos –es decir, son adjetivos que funcionan como sustantivos en este caso. Este fenómeno lingüístico, conocido como “sustantivo atributivo” o “sustantivación del adjetivo”, se produce cuando el sustantivo que el adjetivo complementa no está incluido en la oración, y hace que el adjetivo se convierta en el sustantivo de la frase al tomar el lugar del sustantivo que falta. En este caso, *principales* y *subsidiarias* es la forma corta de *las compañías principales* y *subsidiarias*. Las partes omitieron la palabra “compañías” y transformaron así *principales* y *subsidiarias* en sustantivos. El fenómeno del sustantivo atributivo se produce frecuentemente en el idioma español, y su uso está suficientemente documentado [cita omitida]. También ocurre con frecuencia en inglés [cita omitida]. Por ejemplo, la palabra *subsidiary* (“subsidiaria”) es un sustantivo atributivo que corresponde a la frase completa *subsidiary corporation* (“compañía subsidiaria”) [cita omitida]. El hecho de que el término *subsidiarias* en español sea femenino (que concuerda con *compañías* [companies] *corporaciones* (corporations), *sociedades* (companies or societies),

entidades (entities) o *empresas* (enterprises) –todos sustantivos femeninos) sirve también de fundamento a esta lectura [cita omitida]. Este análisis es importante porque, como se muestra a continuación [párrafos 220ff], en los contextos legales y de negocios en español, *principales* y *subsidiarias* se usan con frecuencia como sustantivos y adjetivos, y conservan siempre su significado principal”.

41. Por lo tanto, los Demandantes rechazan por inapropiado el hecho de que el Demandado se base en el Código de Comercio ecuatoriano que define “principales” como un mandante en un contrato de agencia; y hacen referencia a la declaración pericial del Dr. Coronel y del Dr. Barros a tal efecto. Dado el uso común del término “principales” para referirse a una sociedad controlante cuando se usa junto al término “subsidiarias”, los Demandantes sostienen que no sería plausible que, al redactar el Artículo 5.1, haya habido alguna intención objetiva de desplazar su significado común para elegir un significado técnico estricto tomado de la ley de agencia.

42. En tercer lugar, el contexto de la palabra “principales” dentro del Contrato de Transacción de 1995 muestra una intención objetiva de significar sociedades controlantes; y, de acuerdo con lo dispuesto por el derecho ecuatoriano, la interpretación de un término contractual debe hacerse en su contexto contractual, tal como lo prevé el Artículo 1580 del Código Civil. Este contexto contractual aquí comprende (párrafo 229, *ibídem*):

- “(i) El uso conjunto de *principales* con *subsidiarias* (como en *principales* y *subsidiarias*) muestra la intención de usar estos términos como correlativos;
- (ii) El término *principales* no está usado junto con *agentes*, que aparece en el extremo opuesto de la lista larga de Exonerados (hay 15 categorías de exonerados que los separan), lo cual evidencia la intención de no darle a *principales* un significado dentro del contexto del instituto de la agencia;
- (iii) El Artículo 1.12 del Contrato de Transacción de 1995 muestra la intención general de abarcar a todas las personas relacionadas con TexPet;
- (iv) El hecho de que el Contrato de Transacción menciona expresamente a Texaco Inc. y a sus sucesores evidencia la intención de abarcar a todos los propietarios actuales y futuros y a las sociedades controlantes que entren en la estructura corporativa; y
- (v) Una interpretación armoniosa y de buena fe no es compatible con una interpretación que abarca solamente las afiliadas actuales en la estructura de titularidad corporativa, pero excluye las sociedades futuras”.

43. Los Demandantes sostienen que las Liberaciones de Obligaciones Municipales y Provinciales de 1996 son pertinentes, de acuerdo con lo dispuesto en el derecho ecuatoriano, a la interpretación del Contrato de Transacción de 1995 porque, con el Acta Final de 1998, todas forman parte de la misma transacción general con referencias cruzadas recíprocas. Con la redacción diferente de las Liberaciones

de Obligaciones de 1996, Chevron se beneficiaría de manera manifiesta de una liberación como sociedad controlante de TexPet y, por lo tanto, los Demandantes sostienen que esta documentación contractual evidencia una intención común en transacciones relacionadas de liberar a una futura sociedad controlante de TexPet a falta de cualquier evidencia objetiva que indique cualquier intención en contrario.

44. Los Demandantes también sostienen que el Artículo 9.4 del Contrato de Transacción de 1995 no les impide a los “Exonerados” no signatarios no mencionados exigir sus derechos contractuales contra el Demandado de manera afirmativa. Un Exonerado no es un tercero del Contrato de Transacción de 1995, sino una parte de dicho Contrato, como el Demandado había aceptado originalmente en el Párrafo 134 de su Memorial de Respuesta sobre Jurisdicción. Con estos derechos contractuales, según sostienen los Demandantes, no hay nada en el Contrato de Transacción de 1995 que indique que estos derechos sólo pueden ser ejercidos por un Exonerado como defensa y no como actor, por medio de un reclamo de daños, de tutela declarativa o de cumplimiento específico en contra del Demandado.
45. Con respecto al efecto legal de su interpretación, sostienen los Demandantes que las causas de acción expresamente descritas en el Artículo 5.2 del Contrato de Transacción de 1995 y por las cuales Chevron es liberada como Exonerado incluyen todos los derechos ambientales “colectivos” o “difusos” que puede ejercer sólo el Demandado en interés del público en general “en nombre de la comunidad” (y que por lo tanto podían ser objeto de transacción y liberación por parte del Demandado en virtud del Contrato de Transacción de 1995), diferenciándolos de las causas de acción disponibles a las personas físicas privadas que presentan demandas por su propio daño personal causado por la contaminación ambiental (que no se vieron involucradas en el Contrato de Transacción de 1995). El caso de los Demandantes se basa (entre otras cosas) en la declaración pericial del Dr. Barros, del Dr. Coronel y del Profesor Oquendo.
46. Los Demandantes reconocen que el Contrato de Transacción de 1995 no fue celebrado con la intención de prohibir y no prohíbe demandas ambientales de parte de personas físicas por daños personales sufridos por esas personas físicas, incluidas otras así llamadas “demandas por vacas la muerte de vacas”. En el momento en que se celebró el Contrato de Transacción de 1995, mientras existían derechos colectivos y difusos en virtud del derecho ecuatoriano, según los Demandantes, ninguna persona física privada que no tuviera una demanda por daño personal tenía legitimidad legal para presentar una demanda ambiental (de remediación o daños) con respecto a esos derechos colectivos o difusos. Como

explica el Procurador de Chevron en sus presentaciones orales finales: "... no creo que tenga que ver con la naturaleza del derecho mismo, porque el derecho sí existía [en 1995], el derecho estaba vigente. Es el derecho podía ser ejercitado por el Gobierno para proteger a la gente. Pero no había una acción por parte de la gente para proteger ese mismo derecho" y "...Y señalo que antes de la ley de 94 [99], de medioambiente, los demandantes no podían ejercer derechos difusos a la comunidad. Eso estaba en manos del Gobierno. El Gobierno tenía esa potestad y ese derecho." [D3.529 & 541].

47. Los Demandantes sostienen que el Litigio de Lago Agrio, a diferencia del Litigio de Aguinda anterior tramitado en Nueva York, tiene que ver con demandas ambientales por derechos colectivos o difusos a favor de personas no identificadas precluidas por la liberación contenida en el Contrato de Transacción de 1995, por aplicación del principio de cosa juzgada y preclusión de acuerdo con lo dispuesto en el derecho ecuatoriano aplicable a las transacciones (Artículo 2362 del Código Civil³ y/o por analogía de ley de acuerdo con lo previsto en el Artículo 18 del Código Civil); y que ninguna de esas demandas son iniciadas por personas físicas privadas por su propio daño personal, a diferencia de las demandas presentadas por personas identificables en el Litigio de Aguinda en Nueva York, en el que se vieron afectados solamente derechos individuales, con demandas relacionadas con daño personal.

48. *Las Pretensiones de los Demandantes.* Con respecto a las pretensiones de los Demandantes con relación al Contrato de Transacción de 1995, es necesario transcribir el Párrafo 272 completo del Memorial de Réplica de los Demandantes – Tramo I, que dice lo siguiente:

"272. Por lo tanto, los Demandantes solicitan un Laudo Parcial que proteja efectivamente los derechos de los Demandantes, y que revierta (en la máxima medida posible) los efectos perjudiciales de los incumplimientos en los que ha incurrido Ecuador con respecto a los Contratos de Transacción [es decir, el Contrato de Transacción de 1995 y el Acta Final de 1998] y sus obligaciones bajo el derecho internacional. Para lograr este resultado, los Demandantes presentan respetuosamente la siguiente lista de pretensiones, a partir de la cual el Tribunal puede diseñar una combinación de tutelas declarativa, cautelar y pecuniaria para proteger los derechos de los Demandantes [nota a pie omitida en este caso].

A. Cumplimiento específico

1. Ordenar que Ecuador cumpla específicamente con los Contratos de Transacción.

³ El Artículo 2362 del Código Civil en su versión original en español establece lo siguiente: "La transacción surte el efecto de cosa juzgada en última instancia; pero podrá pedirse la declaración de nulidad o la rescisión, en conformidad a los artículos precedentes".

B. Tutela declarativa

(i) Alcance de los Contratos de Transacción

1. Declarar que ambos Demandantes son “Exonerados” en virtud de los Contratos de Transacción y que fueron liberados de todas las demandas ambientales difusas que surjan de las operaciones de TexPet en Ecuador, y
2. Declarar que las demandas presentadas en el Litigio de Lago Agrio (y en las que se basa la Sentencia de Lago Agrio) son las mismas demandas ambientales difusas resueltas y consideradas liberadas en los Contratos de Transacción.

(ii) Efecto legal de los Contratos de Transacción

1. Declarar que los Demandantes no tienen responsabilidad de cumplir la Sentencia de Lago Agrio porque quedaron totalmente liberados de esas demandas por medio de los Contratos de Transacción,
2. Declarar que las demandas presentadas en el Litigio de Lago Agrio (y en las que se basó la Sentencia de Lago Agrio) quedan impedidas por los principios de cosa juzgada y preclusión,
3. Declarar que, en virtud de los Contratos de Transacción, los Demandantes no tienen ninguna otra responsabilidad por las demandas ambientales difusas en Ecuador por el Impacto Ambiental que surjan de las operaciones del Consorcio, ni de cumplir con ninguna otra remediación ambiental,
4. Declarar que Ecuador (a través de sus varias ramas de Gobierno) ha violado los Contratos de Transacción, entre otras cosas, al negarse al cumplimiento específico de los Contratos de Transacción, al negarse a asegurar el goce por parte de los Demandantes de sus liberaciones y su derecho a quedar libres de todo litigio, al negarse a desestimar las demandas de los Demandantes de Lago Agrio, al negarse a indemnizar a Chevron por las demandas de los Demandantes de Lago Agrio, al tratar de cumplir con los Laudos Provisorios de este Tribunal,
5. Declarar que las acciones de Ecuador violaron el TBI entre Estados Unidos y Ecuador, incluso sus obligaciones de dar un tratamiento justo y equitativo, protección y seguridad total, medios efectivos para hacer cumplir los derechos y de cumplir las obligaciones que asumió en virtud de los acuerdos de inversión generales,
6. Declarar que la ejecución de la Sentencia de Lago Agrio dentro o fuera de Ecuador resultaría incongruente respecto de las obligaciones de Ecuador en virtud de los Contratos de Transacción, del TBI y del derecho internacional,
7. Declarar que la Sentencia de Lago Agrio es nula de acuerdo con el derecho internacional, y

8. Declarar que: (i) la Sentencia no es definitiva, ejecutable ni concluyente en virtud del derecho ecuatoriano ni del derecho internacional y, por lo tanto, no está sujeta a reconocimiento ni ejecución dentro ni fuera de Ecuador; (ii) cualquier ejecución de la Sentencia haría que Ecuador viole sus obligaciones en virtud del derecho internacional; (iii) la Sentencia viola el orden público internacional y la justicia natural, y bajo la doctrina de la cortesía internacional y del orden público, la Sentencia no debería ser ni reconocida ni ejecutada.

C. Tutela cautelar

1. Ordenar a Ecuador que emplee todas las medidas necesarias para cumplir con sus obligaciones en virtud de los Contratos de Transacción para liberar a los Demandantes (y para asegurar que los Demandantes puedan en efecto gozar de los beneficios de esas liberaciones) de toda responsabilidad por la Sentencia de Lago Agrio en Ecuador o en cualquier otro país;

2. Ordenar a Ecuador emplear todas las medidas necesarias para impedir que la Sentencia de Lago Agrio sea definitiva, concluyente o exigible en Ecuador o en cualquier otro país;

3. Ordenar a Ecuador que emplee todas las medidas necesarias para suspender o impedir la ejecución de la Sentencia de Lago Agrio, incluyendo impidiendo a los Demandantes de Lago Agrio acceder algún embargo, carga u otro dispositivo de ejecución relacionado en Ecuador o en cualquier otro país;

4. Ordenar a Ecuador emplear todas las medidas necesarias para revocar y anular la Sentencia;

5. Ordenarle a Ecuador que haga una declaración por escrito ante cualquier tribunal en el que los Demandantes de Lago Agrio traten de reconocer y ejecutar la Sentencia de Lago Agrio en la que establezca que: (i) las demandas que constituyeron la base de la Sentencia fueron liberadas por el Gobierno; (ii) el Tribunal de Lago Agrio no tenía competencia en razón de la persona ni de la materia sobre Chevron; (iii) la Sentencia es nula desde el punto de vista legal; (iv) la Sentencia no es definitiva, ejecutable ni concluyente en virtud del derecho ecuatoriano ni del derecho internacional y, por lo tanto, no está sujeta a reconocimiento ni ejecución dentro ni fuera de Ecuador; (v) cualquier ejecución de la Sentencia colocaría a Ecuador en violación de sus obligaciones bajo el derecho internacional; (vi) la Sentencia viola el orden público internacional y la justicia natural; (vii) cualquier procedimiento de ejecución debería quedar suspendido mientras esté pendiente el laudo final del Tribunal en este arbitraje; y (viii) de acuerdo con el principio de cortesía internacional y de orden público, la Sentencia no debería ser ni reconocida ni ejecutada; y

6. Ordenar que, en caso de que un tribunal ordene el reconocimiento o la ejecución de la Sentencia de Lago Agrio, Ecuador deberá pagar la Sentencia directamente.

D. Daños, costos y honorarios de abogados

1. Otorgar a favor de los Demandantes la indemnización total y el pago de daños en contra de Ecuador con relación a la Sentencia de Lago Agrio, incluyendo una obligación específica a cargo de Ecuador de pagarles a los Demandantes la suma de dinero ordenada en el Sentencia;

2. Otorgar a favor de los Demandantes el pago de las sumas de dinero que los Demandantes de Lago Agrio u otros cobren a los Demandantes o a sus afiliadas con relación a la ejecución de la Sentencia en cualquier foro, y que los pagos de las sumas sean hechas por el Demandado;

3. Otorgar el pago de todos los costos y honorarios de abogados en los que incurran los Demandantes para (i) proveer a la defensa del Litigio de Lago Agrio, (ii) tramitar este arbitraje, (iii) oponerse a las gestiones de Ecuador y de los Demandantes de Lago Agrio para suspender este arbitraje mediante el litigio en los Estados Unidos, y para (iv) prepararse para y defenderse de las acciones de ejecución iniciadas por los Demandantes de Lago Agrio. Estos montos serán determinados en el momento y en la manera que ordene este Tribunal;

4. Otorgar el pago de intereses previos y posteriores al laudo (compuestos trimestralmente) hasta la fecha del pago; y

5. Otorgar cualquier otra tutela que el Tribunal considere justa y apropiada, incluida cualquier tutela específica que resulte apropiada para dar solución a todas las consecuencias de las violaciones de los Contratos de Transacción por parte del Demandado y de sus violaciones de sus obligaciones en virtud de los Laudos Provisorios, del TBI y del derecho internacional”.

49. El Tribunal ha descrito aquí las pretensiones en su totalidad, si bien exceden en parte los temas que deberían ser abordados en el Tramo I en virtud de la Orden Procesal No. 10 del Tribunal. El Tribunal también ha tomado nota de las pretensiones escritas de los Demandantes presentadas por su Procurador en la Audiencia del Mes de Noviembre redactadas en términos sustancialmente similares [D1.31].

50. *El Caso del Demandado.* En resumen, el Demandado niega que bajo el derecho ecuatoriano Chevron sea un “Exonerado” en virtud de lo dispuesto en el Artículo 5.1 o que de otra manera tenga derecho a aprovechar el Contrato de Transacción de 1995, del cual es un “tercero” excluido de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 9.4. Además, aunque Chevron fuera un Exonerado, el Contrato de Transacción de 1995 no tiene bajo el derecho ecuatoriano efecto de cosa juzgada (ni de preclusión) sobre las demandas de los demandantes en el Litigio de Lago Agrio.

51. Como ya se mencionó, el Demandado discrepa con la interpretación que los Demandantes hacen del Artículo 5.1 del Contrato de Transacción de 1995. El Demandado sostiene que la caracterización que hacen los Demandantes de Chevron como “principal” de TexPet dentro de la lista de “Exonerados” es inapropiada porque se basa solamente en las tenencias accionarias indirectas de Chevron en TexPet, y no en una relación de mandante y mandatario entre Chevron y TexPet, como lo exige el texto contractual.

52. Con respecto al instituto de la agencia, el Demandado sostiene que Chevron ha negado siempre toda relación de agencia con TexPet. El Demandado sostiene además que, aunque hubiera una relación de agencia entre Chevron y TexPet después de la fusión entre Texaco y Chevron, no podría haber una relación de agencia con

relación a las operaciones de TexPet que causaron el daño ambiental ya que esas operaciones habían terminado en 1992, de nueve años antes de esa fusión.

53. El Demandado sostiene que Chevron no puede por lo tanto ser un “Exonerado” en virtud del Artículo 5.1 del Contrato de Transacción de 1995 porque no está especificado allí por nombre y la evidencia pertinente no establece la intención de atentar contra el significado liso y llano de los términos contractuales, que deben ser interpretados de acuerdo con el derecho ecuatoriano. En virtud del derecho ecuatoriano, la palabra “principales” sólo hace referencia al mandante en la relación ordinaria de representación entre mandante y mandatario, y por lo tanto excluye a Chevron.

54. Con respecto a los argumentos de los Demandantes basados en la naturaleza abarcativa de la lista de Exonerados del Artículo 5.1, el Demandado se basa en la máxima latina “*inclusio unius est exclusio alterius*” como regla de interpretación bajo el derecho ecuatoriano. El Demandado rechaza la pertinencia de las Liberaciones de Obligaciones Municipales y Provinciales de 1996 como ayuda para interpretar el Artículo 5.1 porque el Demandado no aceptó esa liberación en el Artículo 5.1, que está redactado de manera diferente y que fue firmado entre distintas partes signatarias; y, en todo caso, estos materiales quedan fuera de consideración en virtud del Artículo 9.3 del Contrato de Transacción de 1995. Con respecto a los argumentos lingüísticos de los Demandantes, el Demandado sostiene que la palabra española “matriz” significa compañía controlante y que “principales” no la sustituye como sustantivo atributivo; y, en todo caso, si la intención hubiera sido liberar a todas las compañías controlantes, el término español “las compañías” habría sido utilizado en el Artículo 5.1. Con respecto al contexto contractual, el Demandado sostiene que no hay contexto en el cual el adjetivo “principales”, sin que haya otra definición, pudiera servir para liberar a todas las compañías controlantes futuras en un contrato regido por el derecho ecuatoriano. Por último, en caso de una ambigüedad en la interpretación del Artículo 5.1, el Demandado sostiene que esa ambigüedad debe ser resuelta a favor del Demandado como obligado en virtud del Artículo 1582 del Código Civil ecuatoriano, apoyado en la declaración pericial del Profesor Salgado.

55. Aunque Chevron fuera un Exonerado dentro del Artículo 5.1, el Demandado sostiene que el Artículo 9.4 del Contrato de Transacción de 1995 prohíbe expresamente a toda persona que no sean las partes signatarias ejercer el derecho, como actora, para iniciar una demanda en virtud de los términos del Contrato de Transacción de 1995. En su traducción corregida (la segunda transcrita en el Párrafo 27 precedente), mientras que el Demandado acepta que un Exonerado no

signatario es “parte de” el Contrato de Transacción de 1995, el Demandado sostiene que dicho Exonerado es no obstante un tercero y, como tal, no adquiere derechos a exigir el cumplimiento de las disposiciones del Contrato de Transacción de 1995, como también lo fundamenta la declaración pericial del Profesor Salgado.

56. Esta discapacidad no es subsanada, según el Demandado, por TexPet como parte signataria ni por el Segundo Demandante en este procedimiento arbitral porque TexPet no tiene legitimidad para iniciar una demanda contractual por violación del Contrato de Transacción de 1995. De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 1465 del Código Civil ecuatoriano,⁴ TexPet tenía la libertad de contratar a favor de una tercera persona, pero sólo esa tercera persona puede demandar por sí en virtud de ese contrato y, por lo tanto, TexPet no puede presentar reclamo alguno en este procedimiento en beneficio de Chevron bajo el Contrato de Transacción de 1995, y tampoco puede TexPet presentar ningún reclamo en virtud de ese Contrato para sí al no ser parte del Litigio de Lago Agrio.
57. Sea Chevron un Exonerado o no, el Demandado aduce además que, al aceptar las liberaciones del Artículo 15.2, el Demandado no actuó en carácter de representante que ejerce “derechos difusos” o “colectivos” en nombre de las personas físicas ecuatorianas sino que actuó sólo en su carácter de coparte contractual del Contrato de Concesión de 1973. Con respecto al primero, el Procurador del Demandado explicó en sus presentaciones orales finales: “no había legislación en 1995 que reconociese derechos difusos. El concepto de derechos colectivos se introdujo en la legislación ecuatoriana por primera vez en la Constitución de 1998, o la modificación de la Constitución del 98. Y el tema de derechos difusos se definió por primera vez un año más tarde en 1999, en el acto de gestión de medio ambiente que se llama EMA.” [D3.579-580].
58. Además, tal como estaban las leyes de Ecuador en 1995, el Demandado sostiene que no tenía facultad para representar al pueblo ecuatoriano con respecto a sus derechos individuales y que las personas físicas podían iniciar demandas personales y recuperar daños en virtud de lo dispuesto en el Artículo 19-2 de la Constitución ecuatoriana, haciendo referencia (entre otras cosas) a las decisiones del tribunal en el caso

⁴ El Artículo 1465 del Código Civil en su versión original en español establece lo siguiente: “Cualquiera puede estipular a favor de una tercera persona, aunque no tenga derecho para representarla; pero sólo esa tercera persona podrá demandar lo estipulado; y mientras no intervenga su aceptación expresa o tácita, es revocable el contrato por la sola voluntad de las partes que concurrieron a él. Constituyen aceptación tácita los actos que sólo hubieran podido ejecutarse en virtud del contrato”.

Gutiérrez del 29 de septiembre del 1993 y, no obstante después de 1995, en el caso Delfina Torres del 19 de marzo de 2003.⁵ Con respecto a los derechos difusos existentes en virtud del Artículo 19-2 al momento de la celebración del Contrato de Transacción de 1995, el Demandado sostiene que los derechos ambientales “colectivos” o “difusos” no existían en el derecho ecuatoriano hasta 1998/1999, después del Contrato de Transacción de 1995 y del Acta Final de 1998 [D1.158ffx y D1.187ffxx].

59. Por lo tanto, el Demandado sostiene que el Contrato de Transacción de 1995 no fue celebrado con la intención de prohibir y no podía crear ninguna prohibición en virtud del derecho ecuatoriano para las personas físicas que luego iniciaran demandas por remediación ambiental (después de 1999), tanto demandas individuales por daño personal como demandas por “derechos difusos” o “colectivos” en virtud del Artículo 19-2 o de cualesquiera de las disposiciones del derecho ecuatoriano enumeradas en el Artículo 5.2. El Demandado se basa (entre otras cosas) en la declaración pericial de los Profesores Eguiguren y Le Chatelier.

60. *Las Pretensiones del Demandado:* Es asimismo necesario establecer de manera completa a continuación las pretensiones del Demandado en el Tramo I, tal como consta en el Párrafo 192 de su Dúplica en base al Fondo – Tramo I (aquí con números de párrafos agregados):

“192. En base a lo antes expuesto, la República solicita respetuosamente que el Tribunal dicte un Laudo que:

- (i) Rechace todas las pretensiones solicitadas por los Demandantes con relación al Tramo I, incluidas las pretensiones solicitadas en el Párrafo 272 de la Réplica de los Demandantes en base al Fondo [transcripta anteriormente];
- (ii) Declare que Chevron no es un “Exonerado” en virtud del Contrato de Transacción de 1995 y que, por lo tanto, no tiene fundamento para hacer valer reclamos en virtud del Artículo VI(1)(a) del Tratado;
- (iii) Desestime las pretensiones de Chevron en virtud del Contrato de Transacción de 1995 y del Acta Final de 1998 en base al fondo si el Tribunal considera que Chevron tiene legitimidad en este Arbitraje en cuanto a la jurisdicción;
- (iv) Declare que Texpet no tiene legitimidad para hacer valer reclamos en virtud del Contrato de Transacción de 1995 según el derecho ecuatoriano;
- (v) Desestime las pretensiones de TexPet en base al Contrato de Transacción de 1995 y del Acta Final de 1998 en cuanto al fondo;

⁵ El caso Ángel Gutiérrez del 29 de septiembre del 1993, Quito, Boletín Judicial, Año XCIV, Serie XIV, No. 1, pág. 11 [RLA-285]; y el caso Delfina Torres del 19 de marzo del 2003, Quito, Expediente 229, Registro Oficial 43 [RLA-286].

- (vi) Declare específicamente que el Demandado no ha violado el Contrato de Transacción de 1995 ni el Acta Final de 1998;
- (vii) Desestime todas las pretensiones de los Demandantes que se relacionen con las Resoluciones Locales de 1996 [es decir, las Liberaciones de Obligaciones Municipales y Provinciales de 1996], tanto por jurisdicción como en base al fondo;
- (viii) Declare además que el Demandado no tiene obligación de indemnizar, proteger, defender ni de otra manera mantener indemnes a los Demandantes por demandas presentadas, o por sentencias u otro desagravio obtenidos por terceros, incluidas las demandas presentadas por los Demandantes de Lago Agrio, la Sentencia de Lago Agrio y su ejecución;
- (ix) Declare que el Contrato de Transacción de 1995 no tiene efecto sobre terceros y, específicamente, que la liberación de responsabilidad contenida en dicho Contrato no es extensiva a los derechos y reclamos posiblemente detentados por terceros o que de otra manera podría impedir los reclamos de terceros que surjan del impacto ambiental;
- (x) Declare que el Litigio de Lago Agrio no queda impedido por efectos de cosa juzgada ni de preclusión;
- (xi) Ordene a favor del Demandado el pago de todos los costos y honorarios de abogados en los que haya incurrido el Demandado en relación con esta etapa del procedimiento; y que
- (xii) Ordene a favor del Demandado cualquier otra tutela que el Tribunal considere justa y apropiada”.

61. Como reconoció el Demandado al momento de la Audiencia del Mes de Noviembre, esta tutela, solicitada en respuesta directa a la tutela solicitada por los Demandantes que se extiende más allá de los temas del Tramo I, se extiende a su vez en parte más allá del Tramo I.

PARTE D: ANÁLISIS Y DECISIONES DEL TRIBUNAL

62. *I Introducción – Interpretación Legal:* Como ya se indicó anteriormente, el Tribunal considera que los temas relevantes de la interpretación contractual bajo el Contrato de Transacción son, en última instancia, relativamente breves y simples. El Tribunal establece a continuación las reglas ecuatorianas pertinentes a la interpretación contractual, seguidas de un análisis de la declaración testimonial del perito de las Partes relativo a los temas de la interpretación contractual, y luego analiza y decide en base a su propia interpretación del Contrato de Transacción de 1995.

63. (i) *Las Normas Pertinentes:* Las partes aceptan que el Contrato de Transacción de 1995 debería ser interpretado a la luz del derecho ecuatoriano al momento en que fue firmado [D3.507 y D3.577]. Las Partes también hicieron referencia al informe pericial conjunto del Dr. Enrique Barros, del Dr. César Coronel y del Profesor Roberto Salgado del 6 de agosto del 2012 que contiene un útil resumen de las normas legales ecuatorianas en materia de interpretación contractual aplicables al Contrato de Transacción de 1995, acordado por estos tres peritos de las Partes. El Tribunal está conforme en adoptar y aplicar estas normas a los fines de este Laudo Parcial, en los siguientes términos (traducidos aquí del original en español):

- “(i) Para efectos de la interpretación del referido contrato suscrito en el Ecuador, las leyes ecuatorianas son las aplicables.
- (ii) Deben entenderse además incorporadas al contrato las leyes vigentes a la época de la celebración del mismo (art. 7, número dieciocho, Código Civil).^[6]
- (iii) Las reglas ecuatorianas para interpretar el contrato son las establecidas en el Título XIII del Libro Cuarto del Código Civil, artículos 1576 a 1582.
- (iv) Las reglas relevantes ... son esencialmente las siguientes:
 - a) Por generales que sean los términos de un contrato, solo se aplicarán a la materia sobre la que se ha contratado (artículo 1577).^[7]

⁶ El Artículo 7 del Código Civil establece en su versión original en español, en su parte pertinente: “La ley no dispone sino para lo venidero: no tiene efecto retroactivo; y en conflicto de una ley posterior con otra anterior, se observarán las reglas siguientes: En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración”.

⁷ El Artículo 1577 del Código Civil en su versión original en español establece lo siguiente: “Por generales que sean los términos de un contrato, sólo se aplicarán a la materia sobre que se ha contratado”.

- b) El sentido en que una cláusula puede producir algún efecto deberá preferirse a aquél en que no sea capaz de producir efecto alguno (artículo 1578).^[8]
- c) En aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato (artículo 1579).^[9]
- d) Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándose a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad (artículo 1580, inciso primero).^[10]
- e) No pudiendo aplicarse ninguna de las reglas precedentes de interpretación, se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor. Pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella.^[11]

64. (ii) *La Declaración Pericial*: El Tribunal hace referencia aquí (en resumen) a la declaración pericial sobre el significado contractual de la palabra “principales” según el derecho ecuatoriano en el Artículo 5.1 del Contrato de Transacción de 1995.

65. Los informes escritos de los peritos de los Demandantes, principalmente el Segundo Informe Pericial del Dr. Barros (el “Informe Barros”) y el Segundo Informe Pericial del Dr. Coronel (el “Informe Coronel”), sirven de fundamento a la postura de los Demandantes en el sentido de que “principales” significa una compañía controlante en el Artículo 5.1. Dado que Chevron es una persona jurídica que controla

⁸ El Artículo 1578 del Código Civil en su versión original en español establece lo siguiente: “*El sentido en que una cláusula puede surtir algún efecto deberá preferirse a aquél en que no sea capaz de surtir efecto alguno*”.

⁹ El Artículo 1579 del Código Civil en su versión original en español establece lo siguiente: “*En los casos en que no apareciere voluntad contraria, deberá estarse a la interpretación que más bien cuadre la naturaleza del contrato. Las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen*”.

¹⁰ El Artículo 1580 del Código Civil en su versión original en español establece lo siguiente: “*Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándose a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. Podrán también interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia. O por la aplicación práctica que hayan hecho de ella ambas partes, o una de las partes con aprobación de la otra*”.

¹¹ El Artículo 1582 del Código Civil en su versión original en español establece lo siguiente: “*No pudiendo aplicarse ninguna de las reglas precedentes de interpretación, se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor. Pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella*”.

y es propietaria de manera indirecta de TexPet y, por lo tanto, debe ser considerada una compañía controlante, estos dos peritos concluyen que Chevron es un Exonerado de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 5.1 del Contrato de Transacción de 1995 (y también en el Artículo IV del Acta Final).

66. El Informe Barros (párrafos 23 a 35) pone especial énfasis en el hecho de que los términos “principales y subsidiarias” son utilizados de manera conjunta en la misma frase en el Artículo 5.1, líneas 8 y 9, del Contrato de Transacción de 1995. El Dr. Barros adopta el punto de vista de que en ese contexto “principales” hace referencia no a una relación de mandante y mandatario bajo el instituto de la agencia, sino a la relación entre compañía controlante y subsidiaria desde la perspectiva de la ley de sociedades.
67. Entre otros factores, el Dr. Barros indica que: (a) si las partes hubieran deseado usar el término “principales” dentro del contexto de una relación de agencia, lo habrían mencionado junto con los términos “agentes” o “mandatarios” que se encuentran en la línea 6 del Artículo 5.1, pero no lo hicieron (párrafo 26 del Informe Barros); y (b) una interpretación armoniosa (párrafo 31 del Informe Barros) y de buena fe (párrafo 33 del Informe Barros) del Contrato de Transacción de 1995 y de su Artículo 5.1 influyen en contra de interpretar la liberación como inclusiva solamente de las compañías o personas dentro de la estructura de titularidad (incluida TexPet), tal como era dicha estructura entonces, y no sólo compañías o personas que ingresan a esa misma estructura en una fecha posterior (después de 1995). El Dr. Barros señala que una interpretación contraria del Artículo 5.1 significaría que los funcionarios a cargo de TexPet cuando se acordó la liberación estarían cubiertos como Exonerados, pero no así sus futuros funcionarios que igualmente podrían ser considerados responsables (párrafo 29); y que esta interpretación no tendría ningún sentido.
68. Esta interpretación en contexto es apoyada por el Informe Coronel. El Dr. Coronel expresa el punto de vista de que, a través de la relación entre las palabras “principales” y “subsidiarias”, el Artículo 5.1 debería ser interpretado en el sentido de significar que las compañías por encima y por debajo de aquellas mencionadas allí por nombre, están cubiertas como Exonerados, incluyendo así a Chevron (párrafo 19). En este sentido, el Dr. Coronel también hace referencia específicamente a las

disposiciones del Código Civil: Artículo 1465, Artículo 1562¹², Artículo 1576, Artículo 1578 y Artículo 1580 (Informe Coronel, párrafos 11 a 15).

69. Al basarse en los Artículos 1576 y 1580 del Código Civil, el Dr. Coronel concluye que la lectura conjunta de la definición de la liberación contenida en los Artículos 1.12 y 5.1 del Contrato de Transacción de 1995 confirma la intención de las partes signatarias no sólo de liberar a TexPet sino también a “todas las personas y entidades relacionadas con TexPet” (Informe Coronel, párrafo 20). El Dr. Coronel declara que el Artículo 1.12 hace ampliamente extensiva la liberación a las obligaciones y a la responsabilidad legal y contractual hacia el Gobierno y hacia PetroEcuador que resulta de las Operaciones del Consorcio y con relación al medio ambiente (sin limitarse a TexPet), y que la amplia lista de entidades relacionadas incluida en el Artículo 5.1 demuestra la intención de hacer extensiva la liberación ampliamente a las compañías, entidades y personas no expresamente mencionadas o identificadas por su nombre en el Artículo 5.1.
70. En particular, el Dr. Coronel concluye con respecto al Artículo 5.1 que: (a) la liberación comprende a Texaco, que entonces era la sociedad controlante y titular indirecta de TexPet, lo cual significa que también debería comprender las compañías que en el futuro se conviertan en sociedad controlante y titular indirecta de TexPet; y (b) la referencia a “sucesores” indica que las entidades no expresamente mencionadas por su nombre en su texto igualmente podrían beneficiarse con la liberación. El Dr. Coronel establece que cuando se celebró el Contrato de Transacción de 1995, era imposible saber o incluso predecir que Chevron (o cualquier otra persona o compañía) se convertiría en la sociedad controlante y/o titular de TexPet. Ya que la última sociedad controlante en ese entonces quedaba comprendida expresamente en la liberación (es decir, Texaco), un método lógico para interpretar esta disposición requiere que su significado comprenda dentro de la liberación cualquier compañía futura que reemplace a Texaco como sociedad controlante de TexPet (Informe Coronel, párrafo 20). En ese sentido (y sólo en ese sentido), según el Dr. Coronel, Chevron es una “sucesora” de Texaco; es decir, Texaco fue reemplazada por Chevron como accionista controlante indirecto y matriz de TexPet.

¹² El Artículo 1562 del Código Civil en su versión original en español establece lo siguiente: “*Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan, no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que, por la ley o la costumbre, pertenecen a ella*”.

71. Ni el Informe del Dr. Barros ni el Informe del Dr. Coronel niegan que el término “principales”, fuera del contexto específico en el que se usa dicho término en el Artículo 5.1 pero dentro del contexto de una relación de agencia, puede significar un principal o “mandante”. En este sentido, como se mencionó antes en su Tercer Laudo Parcial (párrafo 4.48), el Tribunal registra que el Diccionario de la Real Academia Española define “principal” como sigue: (i) décimo novena edición (1970): “For. El que da poder a otro para que lo represente, poderdante”; y (ii) vigésimo segunda (última) edición (2001): “Der. Poderdante”. En otras palabras, dentro de un contexto técnico legal (esto es lo que significan las referencias For. o Der.) “principal” significa quien otorga un mandato).
72. El Tribunal menciona que los ejemplos en los que este término ha sido utilizado de manera diferente en el contexto técnico del derecho corporativo ecuatoriano (Informe Barros, párrafo 25) son excepcionales, como se demuestra en los informes del perito del Demandado, Profesor Roberto Salgado Valdez, en particular en su primer informe (el “Informe Salgado”).
73. Sin embargo, el Informe Salgado no va mucho más allá de señalar el significado técnico legal del término “principal”; y, desde el punto de vista del Tribunal, no hay ningún argumento contundente que refute la interpretación contextual propuesta en los Informes Barros y Coronel. El Profesor Salgado se limita a negar esa interpretación (por Ej., párrafo 20 del Informe Salgado), sin abordar el análisis propuesto en los Informes Coronel y Barros. La declaración ofrecida posteriormente por el Profesor Salgado no altera de manera sustancial la postura.
74. (iii) *Análisis del Tribunal en cuanto a la Interpretación Legal*: El Tribunal considera que le corresponde interpretar por sí el texto contractual aplicando las reglas pertinentes en virtud del derecho ecuatoriano y no meramente adoptar las conclusiones a las que llegaron uno o más peritos de las Partes. Además, el Tribunal nota que puede haber diferencias en el método adoptado por algunos de estos peritos y en los casos propuestos por las Partes que los presentan como peritos.
75. Al igual que sucede con todos los temas de interpretación contractual, es necesario comenzar con el texto real en cuestión, como lo exige expresamente el Artículo 33(3) de las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI. Además, desde el punto de vista del Tribunal, ese texto contractual,

acordado por los tres signatarios es, lejos, la mejor prueba objetiva de sus intenciones comunes en virtud del derecho ecuatoriano.

76. *Artículo 9.3:* El Tribunal primero toma en cuenta la disposición “Contrato Completo” en el Artículo 9.3 del Contrato de Transacción de 1995. Sus términos son inequívocos (transcritos en la Parte B precedente, en la traducción al inglés). Por estos motivos, con respecto a la interpretación del Contrato de Transacción de 1995, el Tribunal no obtiene asistencia importante alguna de la declaración del Dr. Veiga ni de los términos de la liberación contenidos en ninguna de las Liberaciones de Obligaciones Municipales y Provinciales de 1996, tal como son invocadas por los Demandantes.
77. *La Liberación de Obligaciones:* A partir del propio Contrato de Transacción de 1995, el Tribunal observa que adopta la forma de un acuerdo bipartito y no tripartito, a pesar de sus tres signatarios. Sus signatarios son las mismas partes signatarias del Contrato de Concesión de 1973 (modificado mediante novación por PetroEcuador en 1976) y del Memorando de Entendimiento de 1994. Desde el punto de vista del Tribunal, queda claro a partir de estos antecedentes (tal como se establece expresamente en su preámbulo y en sus términos) que el Contrato de Transacción de 1995 (con el Acta Final de 1998) tuvo la intención de resolver “para siempre” todas las posibles demandas ambientales presentadas por el Demandado y por PetroEcuador por un lado en contra de TexPet por el otro, que habían surgido o que podrían posiblemente surgir de las operaciones del Consorcio bajo el Contrato de Concesión de 1973 en la región del Oriente de Ecuador, junto con los otros nueve acuerdos enunciados en su Anexo B.
78. Dada la naturaleza de las demandas ambientales, estas demandas no podían limitarse a las demandas contractuales en contra de TexPet sino que se extendían a todas las demandas “legales”, y por lo tanto incluían las demandas extra contractuales, como se describe en el último párrafo del preámbulo: “ ... Texpet conviene en emprender dicho Trabajo de Reparación Ambiental en consideración a que será liberada y descargada de todas sus obligaciones legales y contractuales y responsabilidades por el Impacto Ambiental resultante de las operaciones del Consorcio; ...”. Además, el Artículo 1.12 define que la liberación en el Artículo 5 comprende “todas las obligaciones legales y contractuales y de la responsabilidad, frente al Gobierno y PETROECUADOR ...”; y el Artículo 5.2 hace referencia a “todas las demandas, derechos de demandas, deudas, embargos, acciones y multas por causas de orden común, de derecho civil o de equidad, basadas en contratos o hechos dolosos, causas de acción y penalidad constitucionales, estatutarias, regulatorias...”. Mientras que el Tribunal acepta que el Demandado sostenga que el Contrato de Transacción de 1995

hacía referencia en su mayor parte a las demandas contractuales en contra de TexPet, su objeto no se limitaba a las demandas contractuales iniciadas por el Demandado y por PetroEcuador como co-contratistas, sino que incluía expresamente las demandas extra contractuales iniciadas por el Demandado en sus otras capacidades con derechos y remedios extra contractuales.

79. El Tribunal observa que no hay nada en el texto expreso del Contrato de Transacción de 1995 que contenga una disposición de “mantener indemne”, de indemnidad ni de deber de defensa por parte del Demandado ni de PetroEcuador en caso de que TexPet fuera demandada por cualquier obligación o responsabilidad legal por el Impacto Ambiental que surgiera de las operaciones del Consorcio. La liberación supone que todas las demandas que están comprendidas en el alcance de la liberación sólo podrían ser presentadas por el Demandado (con o sin PetroEcuador), de ese modo ocasiona que dichas disposiciones son inaplicables a una demanda extra contractual iniciada por una tercera persona por derecho propio. Además, hay una diferencia significativa entre una liberación y una indemnización a favor de un Estado: la primera en general es cuantificable al momento de la liberación y puede costarle al Estado poco o nada, mientras que la última, que corresponde al futuro y depende del reclamo de una tercera persona, es generalmente cuantificable y potencialmente costosa para el Estado.
80. A la fecha del Contrato de Transacción de 1995, TexPet enfrentaba demandas separadas de las Municipalidades, cuatro de las cuales habían iniciado procesos legales en contra de TexPet en Ecuador. El Contrato de Transacción de 1995 no establecía ningún desagravio a favor de TexPet con respecto a esas demandas. Por el contrario, el Anexo A le exigía a TexPet negociar resoluciones con estas Municipalidades (lo cual hizo en forma de las Liberaciones de Obligaciones Municipales y Provinciales de 1996, mencionadas anteriormente). El Contrato de Transacción de 1995 tampoco hace mención del Litigio de Aguinda entonces en trámite en Nueva York, del cual el Demandado no era parte.
81. A partir de los términos expresos del Contrato de Transacción de 1995, por lo tanto, el Tribunal concluye que la liberación de cualquier demanda extra contractual iniciada por el Demandado era aplicable a las demandas en las que el Demandado hacía valer sus propios derechos (en una o más de sus capacidades) y no a las demandas iniciadas por otras terceras personas que actuaban independientemente del Demandado y que reclamaban derechos separados y distintos de los derechos del Demandado.

82. *Artículo 5*: De acuerdo con lo previsto en el Artículo 5.1, TexPet y su entonces compañía controlante (Texaco) fueron expresamente mencionados como “Exonerados” en el Contrato de Transacción de 1995. El Tribunal considera que la descripción de “todas” las categorías posteriores de Exonerados no mencionados fue incluida con la intención general de ser lo más amplia posible en ese momento, y de abarcar tanto a todas las personas existentes como a todas las personas futuras asociadas con TexPet que posiblemente pudieran llegar a ser objeto de una demanda ambiental iniciada por el Demandado y PetroEcuador. Esa intención general, sin embargo, debe ceder ante el texto contractual específico acordado por las partes signatarias.
83. Es un fundamento común para las Partes que el texto crucial aparece en el Artículo 5.1 del Contrato de Transacción de 1995: “principales y subsidiarias”. Los argumentos respectivos de las Partes han quedado resumidos anteriormente, así como las conclusiones a las que llegaron los respectivos peritos de las Partes. Es en última instancia un punto breve, desde el punto de vista del Tribunal y no es, por lo tanto, necesario que el Tribunal se extienda demasiado sobre ello.
84. En resumen, el Tribunal acepta el método gramatical, contextual y de sentido común aplicado a este texto propuesto por los Demandantes y sus dos peritos, el Dr. Barros y el Dr. Coronel, y no acepta el método adoptado por el Demandado y su perito, el Profesor Salgado, en base a la aplicación del derecho ecuatoriano que regula el instituto de la agencia. El Tribunal también considera que si la cuestión hubiera surgido en el momento en que se firmó el Contrato de Transacción de 1995, ambas partes habrían reaccionado de manera similar, al efecto de que el texto “principales y subsidiarias” era obviamente un término abreviado, que no requería texto adicional, para “las compañías principales y subsidiarias”, y que ninguna de las partes habría sugerido entonces que su texto elegido se refería a una relación entre mandante y mandatario.
85. Desde el punto de vista del Tribunal, la interpretación del Demandado, propuesta ahora en este arbitraje, habría sido y continúa siendo esencialmente inapropiada, ineficaz e incoherente de acuerdo con las reglas de interpretación contractual del derecho ecuatoriano enumeradas en el Párrafo 63(iv)(a)-(d) precedente. Además, con esta intención general atribuible a las partes signatarias de aceptar clases tan amplias de reclamos en contra de las extensas categorías de posibles demandados, incluyendo expresamente a Texaco como controlante existente de TexPet, sería una rareza extrema si las partes signatarias hubieran tenido la intención,

sin un texto más claro, de excluir a una futura controlante de TexPet porque alguna controlante futura de TexPet (después de Texaco) era el posible demandado más obvio al tener los bolsillos más grandes. El Tribunal decide que no existe tal intención objetiva a partir de los términos del Contrato de Transacción de 1995.

86. Por lo tanto, por estos motivos, el Tribunal decide que Chevron es un “Exonerado” de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 5.1 del Contrato de Transacción de 1995 y en el Artículo IV del Acta Final. A partir de la decisión del Tribunal se determina que Chevron tiene una relación contractual en el Contrato de Transacción de 1995; en otras palabras, Chevron es “parte”, aunque no sea parte signataria de ese Contrato como sí lo es TexPet.
87. *Artículo 9.4:* El siguiente tema de interpretación surge del Artículo 9.4 del Contrato de Transacción de 1995, invocado por el Demandado. Desde el punto de vista del Tribunal, este tema genera también un breve punto de interpretación contractual. Para una referencia más fácil, el Tribunal deja constancia aquí del texto en español del Artículo 9.4, y resalta las dos frases relevantes: “No se deberá inferir que este Contrato conferirá beneficios *a terceros que no sean parte de este Contrato*, ni tampoco que proporcionará derechos *a terceros* para hacer cumplir sus provisiones”. (En la Parte B, párrafo 27 precedente se incluyen las distintas traducciones al inglés de este texto en español hechas por las Partes).
88. El Tribunal decide que el texto del Artículo 9.4 hace referencia a “terceros” que no son parte ni forman parte del Contrato de Transacción de 1995. Esto es evidente de inmediato desde la primera frase de la versión en español y, de hecho, en las traducciones controvertidas al inglés hechas por ambas Partes. El tema surge solamente a partir de la segunda frase del Artículo 9.4 que, según sostiene el Demandado, hace referencia de manera más general a terceros, incluyendo aquí a terceros que también son parte o forman parte del Contrato de Transacción de 1995 descrito en la primera frase del Artículo 9.4.
89. Desde el punto de vista del Tribunal, la segunda frase más corta ha sido incluida como forma abreviada de la primera frase. En otras palabras, ambas frases hacen referencia a terceros que no son parte o no forman parte del Contrato de Transacción de 1995. El Tribunal llega a esta interpretación por cuestiones de gramática, semántica y coherencia contextual, pero también, y por sobre todo, de sentido común y eficacia de acuerdo con las reglas de interpretación contractual del derecho ecuatoriano enumeradas en el Párrafo 63(iv)(a)-(d)

precedente. No tendría ningún sentido atribuirles a las partes signatarias la intención común de incluir a una persona como Exonerado con ostensibles derechos contractuales en virtud de lo dispuesto en el Artículo 5 y luego excluir a esa misma persona de cualquier beneficio para exigir el cumplimiento de esos derechos en virtud del Artículo 9.4. Si un resultado tan absurdo hubiera sido la intención de las partes signatarias, requeriría un texto mucho más claro que el que se expresa en el Artículo 9.4; y, desde el punto de vista del Tribunal, ese texto es esencialmente insuficiente para establecer tal intención.

90. *Ambigüedad Legal*: Desde el punto de vista del Tribunal, aunque muy y extendidamente controvertido entre las Partes, los términos de los Artículos 1.12, 5.1, 5.2, 9.3 y 9.4 no son en última instancia legalmente ambiguos según la ley ecuatoriana. El mero hecho de que la interpretación de un término contractual sea controvertida por las partes y esté sujeta a sus presentaciones y materiales exhaustivos no la hace ambigua. Por lo tanto, el Tribunal no invoca la regla de la interpretación contractual pertinente a la ambigüedad según la ley ecuatoriana mencionada en el Párrafo 63(iv)(e) precedente, incluido el Artículo 1582 del Código Civil.¹³

91. *Decisiones – Interpretación*: Por lo tanto, y por estos motivos, el Tribunal decide que Chevron, como parte y “parte de” el Contrato de Transacción de 1995, puede exigir el cumplimiento de sus derechos contractuales en virtud del Artículo 5 del Contrato de Transacción de 1995 como Exonerado no mencionado (así como también bajo el Artículo IV del Acta Final), de la misma manera y en la misma medida que TexPet es parte signataria y Exonerado nombrado. Además, el Tribunal decide que Chevron y TexPet pueden ejercer aquellos derechos tanto para defenderse como para atacar a la contraria, en carácter de demandante o demandado en procesos legales o arbitrales para solicitar en ambos casos la tutela que resulte apropiada según la ley ecuatoriana. Desde el punto de vista del Tribunal, nada de lo contenido en el Contrato de Transacción de 1995 sirve de sustento a la afirmación de que la manera en la que esos derechos pueden ser ejercidos es limitada, como sostiene el Demandado.

92. *II Introducción – Efecto Legal*: El Tribunal ha experimentado en este caso varios problemas para decidirse por completo sobre las respectivas presentaciones hechas por las Partes con respecto al efecto legal

¹³ El Artículo 1582 del Código Civil establece que, si ninguna de sus reglas de interpretación precedentes resulta aplicable, las cláusulas ambiguas se interpretarán a favor del obligado. (En español: “*No pudiendo aplicarse ninguna de las reglas precedentes de interpretación, se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor. Pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella*”).

del Contrato de Transacción de 1995. Bastante apartado de los intentos de las Partes por introducir en el Tramo I presentaciones ya reservadas para el Tramo II, el Tribunal considera que otras partes de las presentaciones de las Partes tienen importantes superposiciones con temas que corresponden al Tramo II y que aún así otras partes que originalmente debían incluirse en el Tramo I ahora solamente pueden ser decididas por el Tribunal en el Tramo II, particularmente a la luz de los alegatos escritos de las Partes en el Tramo II (que todavía están incompletos a la fecha de este Laudo Parcial). Como advirtió acertadamente el Procurador del Demandado al Tribunal en sus presentaciones orales finales en la Audiencia del Mes de Noviembre, podría haber un riesgo de injusticia procesal si el Tribunal decide demasiados temas en el Tramo I cuando una o más Partes todavía están presentando sus alegatos finales en el Tramo II, particularmente el Demandado [D3.625-626].

93. Por estos motivos, el Tribunal se niega a decidir en este Laudo Parcial bajo el Tramo I: (i) si el Demandado ha violado o no el Artículo 5 del Contrato de Transacción de 1995 y el Artículo IV del Acta Final; y, si es así, precisamente qué remedios tiene disponibles Chevron y/o TexPet en contra del Demandado con respecto a dicha violación (es decir, daños, tutela declarativa o cumplimiento específico); (ii) si las demandas presentadas por los Demandados de Lago Agrio se basan o no en derechos individuales, como derechos distintos de los derechos “colectivos” o “difusos” (en todo o en parte) y si esas demandas son o no sustancialmente similares a las demandas iniciadas por los Demandantes de Aguinda en Nueva York; y (iii) el efecto específico de los cambios en la ley ecuatoriana que tuvieron lugar después de la celebración del Contrato de Transacción de 1995 y del Acta Final de 1998, incluida la interpretación y la aplicación de la Ley de Gestión Ambiental de 1999. Estos temas quedan reservados por este medio a las nuevas decisiones que tome el Tribunal en un laudo posterior y el Tribunal no decide sobre ninguno de ellos en este Laudo Parcial.
94. (i) *Análisis – Efecto Legal*: No obstante, hay otros determinados temas que el Tribunal puede muy bien decidir aquí con respecto al efecto legal de su interpretación del Artículo 5 del Contrato de Transacción de 1995, con respecto a Chevron y al Demandado, a la fecha de celebración por las partes signatarias. (Las posturas de TexPet y de PetroEcuador, si bien no son ignoradas, pueden ser dejadas de lado a los fines actuales; y, como ya se señaló, no se requiere aquí hacer una consideración separada con respecto al Artículo IV del Acta Final de 1998).

95. En primer lugar, el Tribunal decide que la liberación otorgada por el Demandado a Chevron en virtud del Artículo 5 comprende las demandas iniciadas por el Demandado (con o sin PetroEcuador). Tal como está redactada, la liberación no se hace extensiva a las demandas iniciadas por terceras personas con respecto a sus propios derechos individuales separados del Demandado según las leyes ecuatorianas o de otros. Desde el punto de vista del Tribunal, este factor no es materialmente controvertido por las Partes. Los Demandantes reconocen que la liberación no afecta esos derechos individuales, sea por el daño personal reclamado por una persona física, sea por las demandas personales iniciadas por los Demandantes de Aguinda identificables en Nueva York.
96. En segundo lugar, el Tribunal decide que la liberación contenida en el Artículo 5 otorgada por el Demandado no equivale, a partir de su propio texto y en virtud del derecho ecuatoriano, a una transacción con efecto general “*erga omnes*” en carácter de cosa juzgada sobre las demandas iniciadas por terceras personas con respecto a sus propios derechos individuales separados del Demandado según las leyes ecuatorianas o de otros. En virtud de la ley ecuatoriana, para transigir una demanda, una persona debe tener la capacidad de disponer de esta demanda; y el Demandado no tenía derecho a disponer de esa demanda individual por una tercera persona: Artículos 2349 y 2354 del Código Civil.¹⁴ Este tema es diferente y no debe confundirse con el siguiente tema relacionado con la capacidad del Demandado con respecto a los derechos “difusos” o “colectivos” al momento del Contrato de Transacción de 1995.
97. Las palabras “difuso” y “colectivo” no aparecen en el Contrato de Transacción de 1995. Sin embargo, tal como quedó registrado en el Párrafo 63 precedente, los peritos de las partes aceptan que las leyes de Ecuador al momento en que se celebró el Contrato de Transacción de 1995 quedan incorporadas al Contrato de Transacción de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 7, numeral dieciocho, del Código Civil.¹⁵ En su informe pericial conjunto de fecha 7 de agosto del 2012, los Profesores Le Chatelier y Oquendo acordaron la siguiente definición legal de los derechos difusos: “Los derechos difusos son títulos indivisibles que pertenecen a la comunidad en su conjunto, como, por ejemplo, el derecho colectivo de la comunidad de vivir en un ambiente sano y sin contaminación

¹⁴ El Artículo 2349 del Código Civil establece que la única persona que puede transigir es la persona que puede disponer de los objetos afectados por la transacción. (En español: “*No puede transigir sino la persona capaz de disponer de los objetos comprendidos en la transacción*”). El Artículo 2354 del Código Civil establece que una transacción con respecto a los derechos de otros no es válida. (En español: “*No vale la transacción sobre derechos ajenos o sobre derechos que no existen*”).

¹⁵ El Artículo 7 del Código Civil establece, en su parte pertinente: “*La ley no dispone sino para lo venidero: no tiene efecto retroactivo; y en conflicto de una ley posterior con otra anterior, se observarán las reglas siguientes: ... En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración*”.

...”. Aunque estos dos peritos citan como referencias (entre otras cosas) las leyes ecuatorianas posteriores a 1995 (incluida la Ley de Gestión Ambiental de 1999), el Tribunal considera que esta definición acordada es igualmente apropiada al momento en que se celebró el Contrato de Transacción de 1995 con respecto a la ley ecuatoriana incorporada en el Contrato de Transacción de 1995. A los fines que nos ocupan, el Tribunal no ve ninguna distinción sustancial entre los términos derechos “difusos” y “colectivos”, y en este caso prefiere usar solamente el primero.

98. (ii) *Artículo 19-2*. Este tema de los derechos difusos tiene que ver, por sobre todo, con la naturaleza de los derechos legales expresados en el Artículo 19-2 de la Constitución Ecuatoriana vigente en el momento en que las partes signatarias celebraron el Contrato de Transacción de 1995. Esa disposición constitucional fue citada expresamente en el Artículo 5.2 del Contrato de Transacción de 1995, y también quedó incorporada en virtud de las reglas ecuatorianas de interpretación contractual (véase la Parte B precedente donde se incluye el texto en español y su traducción al inglés).

99. A pesar de que el Artículo 19-2 no está enmarcado en términos que confieren de manera explícita ningún derecho de acción, las Partes entienden que sí confirió un derecho a un ambiente libre de contaminación garantizado por “el Estado”. Desde el punto de vista constitucional, el “Estado” en el Artículo 19-2 es por supuesto el Demandado. A pesar de que no hay registro (a 1995) de que el Demandado haya alguna vez recurrido a un proceso legal para iniciar una demanda ambiental en contra de una persona en virtud del Artículo 19-2, queda claro a partir del texto del Artículo 5.2 del Contrato de Transacción de 1995 que las partes signatarias (incluido el Demandado) consideraron objetivamente la existencia de esta posibilidad, sin importar cuán remota fuera la posibilidad de que se produjera en la práctica. Además, el perito del Demandado, el Profesor Eguiguren, reconoció en su declaración oral en la Audiencia del Mes de Noviembre que el Demandado podría iniciar esa demanda en 1995 [D1.208-209]. Por lo tanto, el Tribunal concluye que el Artículo 5 fue incluido con la intención de impedirle al Demandado presentar por sí una demanda en contra de un Exonerado (que ahora incluye a Chevron) en virtud del Artículo 19-2 de la Constitución (o su posterior equivalente constitucional).

100. Por otro lado, como se decidió anteriormente, el texto contractual también registra la intención de las partes signatarias de no afectar las demandas iniciadas por separado por otras terceras personas con sus propios derechos individuales; ni podría afectar aquellos derechos separados de terceras personas

en virtud de la ley ecuatoriana: véase Artículo 2363 del Código Civil.¹⁶ El Tribunal por lo tanto concluye que, en 1995, una persona física que reclamaba daños por daño personal continuaba teniendo derecho a hacerlo, no obstante la liberación del Demandado en el Artículo 5, incluso cuando esa persona invocó el Artículo 19-2 de la Constitución en apoyo de una demanda individual de daños con respecto al daño personal (real o potencial) separado del Demandado. El Tribunal menciona la decisión en el caso Gutiérrez del 29 del septiembre de 1993 en el que se ordenó el pago de daños al demandante individual en contra del criador de cerdos demandado por daño personal a su persona, su esposa y su propiedad en base (entre otras cosas) en base a una demanda en virtud del Artículo 19-2 de la Constitución.¹⁷

101. Sin embargo, el tema no es si esa persona física podría iniciar esa demanda con respecto a su daño personal, sino más bien si dicha persona física podría iniciar una demanda con respecto al daño que surge de la supuesta violación de un derecho difuso en virtud del Artículo 19-2 de la Constitución sin reclamar haber sufrido un daño personal. El Tribunal considera que, en 1995, esa demanda presentada por una persona física no era posible según la ley ecuatoriana, dado que esa causa de acción estaba limitada en virtud del Artículo 19-2 solamente al Demandado. Resulta útil aquí establecer los métodos contrarios adoptados por los respectivos peritos de las Partes, tal como lo registran en detalle en su informe pericial conjunto de fecha 7 de agosto del 2012.

102. En resumen, los peritos de los Demandantes (el Dr. Barros, el Dr. Coronel, el Profesor Oquendo y el Dr. Romero) declararon que el derecho constitucional en virtud del Artículo 19-2 era un derecho difuso e indivisible porque el titular de ese derecho era toda la comunidad de ciudadanos ecuatorianos (no personas físicas ni grupos de personas físicas); el Gobierno ecuatoriano hizo valer este derecho en beneficio de toda la comunidad de ciudadanos ecuatorianos en el Contrato de Transacción de 1995, en ejercicio del deber del Demandado de reivindicar el derecho de sus ciudadanos a vivir en un ambiente libre de contaminación y a fomentar la conservación de la naturaleza; y, por lo tanto, el Contrato de Transacción

¹⁶ El Artículo 2363 del Código Civil establece que una transacción solamente tendrá efecto entre las partes de dicha transacción (En español: “*La transacción no surte efecto sino entre los contratantes. Si son muchos los principales interesados en el negocio sobre el cual se transige, la transacción consentida por uno de ellos, no perjudica ni aprovecha los otros; salvo, empero, los efectos de la novación, en el caso de solidaridad*”). El Artículo 297 del Código Procesal Civil exige la identidad común de (i) las partes, (ii) la *causa petendi* (con respecto a los hechos y la base legal); y (iii) el objeto.

¹⁷ Caso Ángel Gutiérrez del 29 de septiembre del 1993 (ibídem).

de 1995 (con el Acta Final) extinguió toda posible demanda ambiental en contra de los Exonerados que surja de la supuesta violación de este derecho difuso en virtud del Artículo 19-2, ya sea iniciado por el Demandado o por una tercera persona.

103. En resumen, los peritos del Demandado (el Profesor Eguiguren, apoyado por el Profesor Le Chatelier), si bien reconocen que un derecho difuso es indivisible, declararon que, para transigir un derecho, la parte que lo transige debe tener la capacidad de disponer de ese derecho según el derecho ecuatoriano; el Gobierno Ecuatoriano actuó en el Contrato de Transacción de 1995 para resolver exclusivamente sus propios derechos que surgen del Contrato de Concesión de 1973; el Gobierno no tenía capacidad para: (i) disponer de los derechos de personas físicas ni (ii) para representar personas físicas con el fin de resolver sus derechos conferidos por la ley ecuatoriana, incluidos los derechos en virtud del Artículo 19-2 de la Constitución; y para este fin, la naturaleza del derecho es irrelevante (es decir, ya sea difuso o de otra naturaleza) porque una transacción, de acuerdo con la ley ecuatoriana, solamente puede afectar a las partes de esa transacción y no puede afectar los derechos de terceras personas.

104. Como ya se mencionó anteriormente, la primera de estas proposiciones con respecto a derechos “individuales” ha sido aceptada por los peritos de las Partes y los Demandantes no la controvierten. Es la segunda proposición relativa al Artículo 19-2 la que divide a los peritos de las Partes.

105. A partir de los materiales aducidos por las Partes y sus peritos en este procedimiento arbitral, el Tribunal concluye que el derecho difuso e indivisible en virtud del Artículo 19-2 de la Constitución era el mismo antes y después del Contrato de Transacción de 1995. En particular, el Profesor Eguiguren declaró en la Audiencia del Mes de Noviembre que “... el derecho sigue siendo el mismo, el derecho de vivir en un ambiente sano es el mismo de 1995. En realidad desde 1983, en que se introduce en la Constitución Ecuatoriana. Es el mismo del 98, es el mismo del 2008 ...” [D1.199]. Lo que cambió según la ley ecuatoriana después de 1995 fue la legitimidad de una persona física privada para iniciar una demanda en virtud del Artículo 19-2 haciendo valer un derecho constitucional difuso (no siendo una demanda con respecto al daño personal de esa persona física). Esa nueva legitimidad fue posteriormente confirmada por la Ley de Gestión Ambiental de 1999.

106. Desde el punto de vista del Tribunal, en virtud del derecho ecuatoriano, a la fecha en que se celebró el Contrato de Transacción de 1995 (es decir, antes de la Ley de 1999), solamente el Demandado podía iniciar una demanda difusa en virtud del Artículo 19-2 para salvaguardar el derecho de los ciudadanos a vivir en un ambiente libre de contaminación. En ese entonces, ninguna otra persona podía iniciar ese tipo de demanda. Ninguna instancia en la que el Demandado haya iniciado o transigido una demanda de este tipo (salvo este caso) ni ninguna disposición decisiva de la ley ecuatoriana fue presentada al Tribunal. No obstante, se debe deducir a partir de las circunstancias prevalentes en 1995 que el Demandado y sólo el Demandado tenía la capacidad legal para iniciar y transigir una demanda difusa en virtud del Artículo 19-2. Si el Demandado no podía iniciar y luego transigir una demanda difusa en virtud del Artículo 19-2, nadie más podría. El Tribunal por lo tanto está persuadido por el análisis presentado por los peritos de los Demandantes sobre este punto, a saber que en 1995 el Demandado (actuando a través de su Gobierno) podría transigir una demanda difusa en virtud del Artículo 19-2 “para siempre” entre los Exonerados; y que, por lo tanto, dicha demanda difusa no podía ser iniciada en el futuro en contra de ningún Exonerado.

107. Después de 1995, el Tribunal considera que la misma situación es la que prevaleció: el derecho a iniciar una demanda ambiental en base al derecho difuso en virtud del Artículo 19-2 en contra de los Exonerados quedó resuelto “para siempre”. El nuevo factor, confirmado por la Ley de Gestión Ambiental de 1999, que indicaba que una o más personas físicas privadas ahora tienen legitimidad para iniciar una demanda en la que se hacen valer derechos difusos no podía revivir el derecho difuso en virtud del Artículo 19-2 que ya había sido extinguido por el Contrato de Transacción de 1995. No es posible desde el punto de vista jurídico que una persona ejerza un derecho que ya no existe aunque, si ese derecho continuara existiendo, esa persona haya adquirido nuevamente el derecho a ejercerlo. Como acuerdan los peritos de las Partes, ese derecho difuso en virtud del Artículo 19-2 era “indivisible”: o bien se resolvía en su totalidad o no se resolvía. El Tribunal rechazó esta última posibilidad; y decide en base a la primera. Rechaza por completo la tercera posibilidad de que el mismo derecho difuso del Artículo 19-2 pueda existir en partes separadas, para ser ejercido por múltiples demandantes en distintos momentos con demandas difusas sucesivas, haciendo así que cualquier resolución o adjudicación final efectiva de dichas demandas resulte ilusoria.

108. (iii) *Decisiones – Efecto Legal*: Por lo tanto, por estos motivos, el Tribunal concluye que, según la ley ecuatoriana, el Artículo 5 del Contrato de Transacción de 1995 y del Artículo IV del Acta Final impide cualquier demanda por parte del Demandado en contra de cualquier Exonerado

invocando el derecho constitucional difuso en virtud del Artículo 19-2 de la Constitución, pero que estas liberaciones también impiden que cualquier tercera persona presente una demanda en contra de un Exonerado invocando el mismo derecho constitucional difuso en virtud del Artículo 19-2, no siendo una demanda separada y diferente de daño personal (real o potencial).

109. Se notará que el Tribunal no ha considerado las demás disposiciones estatutarias enumeradas en el Artículo 5.2 del Contrato de Transacción de 1995, particularmente el Decreto No. 374, la Ley del Agua de 1973 y el Decreto No. 2144. El Tribunal ha escuchado hablar mucho menos de estas disposiciones hasta ahora y, por lo tanto, se muestra renuente a tomar decisiones finales en ese sentido antes de estar seguro de que no hay diferencias sustanciales entre la naturaleza de los derechos legales en virtud de estas disposiciones y los derechos en virtud del Artículo 19-2. El Tribunal, si es necesario, solicitará nuevas presentaciones a las Partes sobre este punto.

110. Por último, el Tribunal no ha decidido aquí sobre la naturaleza ni el alcance de las acciones populares en virtud de los Artículos 990 y 2236 del Código Civil. A partir de los informes periciales de los peritos de las Partes, aparentemente es algo aceptado por todos que un demandante no podría iniciar una demanda ambiental como acción popular sin (entre otras cosas) reclamar un daño personal real o potencial. El Tribunal nuevamente ha escuchado hablar mucho menos acerca de estas acciones populares (tanto antes como después del Contrato de Transacción de 1995) y, si bien parece actualmente que estas acciones no tienen posibilidad de ser decisivas en un sentido ni en el otro en este caso, el Tribunal una vez más prefiere diferir su decisión por el momento. Asimismo, el Tribunal, de ser necesario, solicitará nuevas presentaciones a las Partes sobre estas acciones populares.

PARTE E: LA PARTE OPERATIVA

111. Este Laudo Parcial, si bien ha sido firmado por separado por los miembros del Tribunal en tres páginas de firmas, constituye un “Laudo Parcial” firmado por los tres árbitros de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 32 de las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI.
112. Por los motivos antes expuestos, el Tribunal finalmente decide y dictamina lo siguiente en el Tramo I de este procedimiento arbitral:
- (1) El Primer Demandante (“Chevron”) y el Segundo Demandante (“TexPet”) son ambos “Exonerados” de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 5.1 del Contrato de Transacción de 1995 y en el Artículo IV del Acta Final de 1998;
 - (2) En su carácter de Exonerado, una parte y también parte del Contrato de Transacción de 1995, el Primer Demandante puede invocar sus derechos contractuales en virtud de dicho Contrato con respecto a la liberación establecida en el Artículo 5.1 del Contrato de Transacción de 1995 y en el Artículo IV del Acta Final de 1998 con el máximo alcance igual al Segundo Demandante como parte signataria y Exonerado designado;
 - (3) El alcance de las liberaciones contenidas en el Artículo 5 del Contrato de Transacción de 1995 y en el Artículo IV del Acta Final de 1998 otorgadas por el Demandado a favor del Primer y del Segundo Demandante no es extensivo a ninguna demanda ambiental presentada por un individuo por daño personal con respecto a los derechos de ese individuo de manera separada y diferente del Demandado; pero sí tiene efecto legal de acuerdo con lo dispuesto en el derecho ecuatoriano e impide cualquier demanda “difusa” contra el Primer y el Segundo Demandante de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 19-2 de la Constitución presentada por el Demandado y también presentada por cualquier individuo que no reclame un daño personal (real o potencial); y

(4) Salvo lo antes mencionado, el Tribunal no decide en esta instancia (ni en un sentido ni en el otro) ninguna parte de las pretensiones formales reclamadas por las Partes respectivamente con relación al Tramo I, y se reserva para sí sus plenas facultades y discreción para hacerlo en uno o más laudos a futuro.

LUGAR DEL ARBITRAJE: LA HAYA, PAÍSES BAJOS

FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

EL TRIBUNAL:

Dr. Horacio A. Grigera Naón:

Profesor Vaughan Lowe:

V.V. Veeder (Presidente): [firmado]

(4) Salvo lo antes mencionado, el Tribunal no decide en esta instancia (ni en un sentido ni en el otro) ninguna parte de las pretensiones formales reclamadas por las Partes respectivamente con relación al Tramo I, y se reserva para sí sus plenas facultades y discreción para hacerlo en uno o más laudos a futuro.

LUGAR DEL ARBITRAJE: LA HAYA, PAÍSES BAJOS

FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

EL TRIBUNAL:

Dr. Horacio A. Grigera Naón: [firmado]

Profesor Vaughan Lowe:

V.V. Veeder (Presidente): [firmado]

(4) Salvo lo antes mencionado, el Tribunal no decide en esta instancia (ni en un sentido ni en el otro) ninguna parte de las pretensiones formales reclamadas por las Partes respectivamente con relación al Tramo I, y se reserva para sí sus plenas facultades y discreción para hacerlo en uno o más laudos a futuro.

LUGAR DEL ARBITRAJE: LA HAYA, PAÍSES BAJOS

FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

EL TRIBUNAL:

Dr. Horacio A. Grigera Naón: [firmado]

Profesor Vaughan Lowe: [firmado]

V.V. Veeder (Presidente): [firmado]

MERRILL CORPORATION

Merrill Communications LLC



225 Varick Street
New York, NY 10014 • (212) 620-5600

State of New York)
Estado de Nueva York)
County of New York)
Condado de Nueva York)

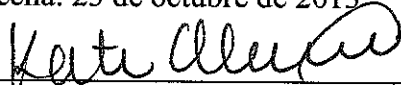
ss:
a saber:

Certificate of Accuracy Certificado de Exactitud

This is to certify that the attached translation is, to the best of our knowledge and belief, a true and accurate translation from English into Spanish of the attached document.

Por el presente certifico que la traducción adjunta es, según mi leal saber y entender, traducción fiel y completa del idioma inglés al idioma español del documento adjunto.

Dated: October 23, 2013
Fecha: 23 de octubre de 2013



Kate Alexander
Project Manager – Legal Translations
Merrill Brink International/Merrill Corporation

[firmado]

Kate Alexander
Gerente de Proyecto – Traducciones Legales
Merrill Brink International/Merrill Corporation

Sworn to and signed before
Jurado y firmado ante
Me, this 23rd day of
mí, a los 23 días del
October 2013
mes de octubre de 2013

ROBERT J. MAZZA
Notary Public, State of New York
No. 01MA5057911
Qualified in Kings County
Commission Expires April 1, 2014



Notary Public
Notario Público

[firmado]
[sello]

PCA CASE NO. 2009-23

**IN THE MATTER OF AN ARBITRATION BEFORE A TRIBUNAL CONSTITUTED
IN ACCORDANCE WITH THE TREATY BETWEEN THE UNITED STATES OF
AMERICA AND THE REPUBLIC OF ECUADOR CONCERNING THE
ENCOURAGEMENT AND RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS,
SIGNED 27 AUGUST 1993 (THE “TREATY”) AND THE UNCITRAL
ARBITRATION RULES 1976**

BETWEEN: –

1. CHEVRON CORPORATION (“Chevron”)

2. TEXACO PETROLEUM COMPANY (“TexPet”)

(both of the United States of America)

The First and Second Claimants

- and -

THE REPUBLIC OF ECUADOR

The Respondent

First Partial Award on Track I

dated 17 September 2013

The Arbitration Tribunal:

**Dr Horacio A. Grigera Naón;
Professor Vaughan Lowe;
V.V. Veeder (President)**

Administrative Secretary: Martin Doe

TABLE OF CONTENTS

<i>PART A: The Arbitration – Track I</i>	04
<i>Introduction</i>	04
<i>Procedure</i>	04
<i>Written Pleadings</i>	05
<i>Written Testimony</i>	05
<i>The November Hearing</i>	07
<i>Track II</i>	08
<i>PART B: The Principal Documents</i>	09
<i>Introduction</i>	09
(i) <i>The 1995 Settlement Agreement</i>	09
(ii) <i>The 1996 Municipal and Provincial Releases</i>	13
(iii) <i>The 1998 Final Release</i>	14
<i>PART C: The Parties’ Respective Cases</i>	16
<i>Introduction</i>	16
<i>The Claimants’ Case</i>	16
<i>The Claimants’ Claimed Relief</i>	20
<i>The Respondent’s Case</i>	23
<i>The Respondent’s Claimed Relief</i>	26
<i>PART D: The Tribunal’s Analyses and Decisions</i>	28
<i>I: Introduction – Legal Interpretation</i>	28
(i) <i>The Relevant Rules</i>	28
(ii) <i>The Expert Testimony</i>	29

<i>(iii) Analysis – Legal Interpretation</i>	32
<i>Article 9.3</i>	33
<i>The Release</i>	33
<i>Article 5</i>	35
<i>Article 9.4</i>	36
<i>Legal Ambiguity</i>	37
<i>Decisions – Legal Interpretation</i>	37
<i>II: Introduction – Legal Effect</i>	37
<i>(i) Analysis – Legal Effect</i>	38
<i>(ii) Article 19-2</i>	40
<i>(iii) Decisions – Legal Effect</i>	43
<i>PART E: The Operative Part</i>	45

APPENDIX 1: The 1995 Settlement Agreement (Spanish original version)

PART A: THE ARBITRATION – TRACK I

1. *Introduction:* This Partial Award addresses the Parties' dispute concerning the legal interpretation and legal effect of the 1995 Settlement Agreement made between the Second Claimant ("TexPet") and the Respondent as its signatory parties, to which the First Claimant ("Chevron") was not a signatory Party. For ease of reference, a full copy of the 1995 Settlement Agreement in its original Spanish version is appended to and forms part of this Partial Award (Appendix 1). Given the original language of this Partial Award, for convenience only, references are made below to its English translation, save where otherwise indicated.
2. Given the status of this Partial Award as the fifth award made in these arbitration proceedings, it serves no purpose here re-stating the formal parts set out in the Tribunal's earlier awards; and for simplicity's sake, the Tribunal here incorporates by reference Part I of its Third Interim Award on Jurisdiction and Admissibility dated 21 February 2012.
3. *Procedure:* In summary, applying a 'prima facie' standard appropriate to issues of jurisdiction, the Tribunal decided in that Third Interim Award that the Claimants' interpretation of the 1995 Settlement Agreement, albeit strongly disputed by the Respondent, was at least "serious"; but the Tribunal did not otherwise there finally decide on the interpretation or effect of the 1995 Settlement Agreement one way or the other. Instead the Tribunal decided, given that both were mixed questions relevant to the Respondent's disputed jurisdictional objections under Article VI(1)(a) of the BIT and to the merits of Chevron's disputed claims, to join the Respondent's jurisdictional objection to the merits of those claims under Article 21(4) of the UNCITRAL Arbitration Rules.
4. Subsequently, by its Procedural Order No 10 dated 9 April 2012, the Tribunal divided the merits of the Parties' dispute into two parts, entitled "Track I" and "Track II". Track I was to comprise preliminary legal issues arising from the 1995 Settlement Agreement, limited to its legal interpretation and legal effect as alleged by the

Claimants and disputed by the Respondent, including (in particular) whether or not Chevron is a “Releasee” under the 1995 Settlement Agreement and Article IV of the 1998 Final Release: Paragraphs 2 & 3 of the Procedural Order.

5. Given the complexities of the Parties’ overall dispute and its developing nature as this arbitration continues, the Tribunal also recognised in Procedural Order No 10 that it might not be possible or appropriate to decide these preliminary issues in full, thereby requiring the Tribunal to defer one or more decisions to Track II. Even in that event, however, the Tribunal recognised that time and expense would not necessarily be duplicated or wasted for the Parties or the Tribunal. As explained below, the Tribunal has decided that it is not appropriate in Track I to decide in full the legal effect of the 1995 Settlement Agreement, applying the legal interpretation here decided by the Tribunal.

6. *Written Pleadings:* Pursuant to the Tribunal’s procedural orders, the Parties submitted the following written pleadings relevant to Track I (the first two pre-dating Procedural Order No 10):
 - (i) The Claimants’ Memorial on the Merits dated 6 September 2010;
 - (ii) The Claimants’ Supplemental Memorial on the Merits dated 20 March 2012;
 - (iii) The Respondent’s Counter-Memorial dated 3 July 2012;
 - (iv) The Claimants’ Reply Memorial dated 29 August 2012; and
 - (v) The Respondent’s Rejoinder dated 26 October 2012.

Whilst the Parties have submitted during these proceedings other written pleadings touching upon issues decided in this Partial Award, the Tribunal considers that their respective written cases for Track I can fairly be taken for present purposes from the five pleadings listed above.

7. *Written Testimony:* The Claimants submitted the following written expert testimony relevant to Track I:
 - (i) The first expert report of Dr Enrique Barros (undated);

- (ii) The first and second expert reports of Dr César Coronel Jones dated 3 September 2010;
- (iii) The first expert report of Professor Ángel R. Oquendo dated 2 September 2010;
- (iv) The first expert report of Dr Gustavo Romero Ponce dated 3 September 2010;
- (v) The second expert report of Dr Enrique Barros dated 27 August 2012;
- (vi) The third expert report of Dr César Coronel Jones dated 28 August 2012;
- (vii) The expert report of Professor William T. Allen dated 27 August 2012;
- (viii) The second expert report of Professor Ángel R. Oquendo dated 28 August 2012;
- (ix) The second expert report of Dr Gustavo Romero Ponce dated 27 August 2012;
- (x) The third expert report of Dr Enrique Barros dated 19 November 2012;
- (xi) The fourth expert report of Dr Enrique Barros dated 19 November 2012; and
- (xii) The fourth expert report of Dr César Coronel Jones dated 19 November 2012.

8. The Claimants submitted the following written factual testimony relevant to Track I:

- (i) The witness statement of Mr Frank G. Soler dated 27 August 2010;
- (ii) The first witness statement of Dr Ricardo Reis Veiga dated 27 August 2012; and
- (iii) The second witness statement of Dr Ricardo Reis Veiga dated 28 August 2012.

9. The Respondent submitted the following written expert testimony relevant to Track I:

- (i) The first expert report of Professor Roberto Salgado Valdez dated 1 October 2010;
- (ii) The first expert report of Professor Genaro Eguiguren dated 2 July 2012;
- (iii) The second expert report of Professor Roberto Salgado Valdez dated 2 July 2012;
- (iv) The first expert report of Professor Gilles Le Chatelier dated 2 July 2012;
- (v) The third expert report of Professor Roberto Salgado Valdez dated 26 October 2012;
- (vi) The second expert report of Professor Genaro Eguiguren dated 26 October 2012; and
- (vii) The second expert report of Professor Gilles Le Chatelier dated 25 October 2012;

10. The Respondent submitted the following written factual testimony relevant to Track I:
 - (i) The witness statement of Mr Giovanni Elicio Mario Rosania Schiavone dated 24 October 2012.

11. Pursuant to the Tribunal's orders, the Parties also submitted the following joint expert reports:
 - (i) The joint expert report dated 6 August 2012 of Dr Enrique Barros, Dr César Coronel Jones and Professor Roberto Salgado Valdez;
 - (ii) The joint expert report dated 7 August 2012 of Dr Enrique Barros, Dr César Coronel Jones, Professor Genaro Eguiguren, Professor Ángel R. Oquendo and Dr Gustavo Romero Ponce; and
 - (iii) The joint expert report dated 7 August 2012 of Professor Gilles Le Chatelier and Professor Ángel R. Oquendo.

12. *The November Hearing*: The issues under Track I were argued by the Parties at the oral hearing in London held over three days from 26 to 28 November 2013, with the assistance of English and Spanish interpreters and recorded in the form of both English and Spanish transcripts (the "November Hearing"). The references below are made to the English version of the November Hearing's verbatim transcript, as follows: D1.10 signifies the first day, at page 10.

13. The Claimants and the Respondent were represented respectively at the November Hearing by those persons listed in the verbatim transcript; and it serves no purpose here listing these persons by name, save as follows: for the Claimants, opening oral submissions were made Mr Hewitt Pate [D1.8], Professor Crawford [D1.12] and Doak Bishop Esq [D1.33]; for the Respondent opening oral submissions were made by Attorney-General García Carrion [D1.60] and Professor Douglas [D1.64]; for the Claimants, closing oral submissions were made by Mr Hewitt Pate [D3.471], Professor Crawford [D3.491 & D3.545] and Doak Bishop Esq [D3.522]; and for the Respondent, closing oral submissions were made by Luis Gonzáles Esq [D3.555], Tomás Leonard Esq [D3.573] and Eric W. Bloom Esq [D3.594].

14. The Claimants tendered three oral witnesses at the November Hearing: (i) Dr Ricardo Reis Vega [D2.244x, 247xx & 283xxx]; (ii) Professor Ángel P. Oquendo [D2.298x, 299xx & 376xxx]; and (iii) Dr Gustavo Romero Ponce [D2.381 & 383xx]. The Respondent tendered two oral witnesses at the November Hearing: (i) Mr Giovanni Elicio Mario Rosania Schiavone [D1.96x, 104xx & 147 xxx]; and (ii) Professor Genaro Eguiguren [D1.155x, 173xx & 219xxx].
15. *Track II:* At as the date of this Partial Award, the Parties are completing their written pleadings in Track II, to be achieved by 29 November 2013, with the oral hearing in Track II fixed to start on 13 January 2014.

PART B: THE PRINCIPAL DOCUMENTS

16. *Introduction:* It is necessary at the outset to describe briefly the three principal sets of contractual documentation to which further reference is made below: (i) the 1995 Settlement Agreement, (ii) the 1996 Municipal and Provincial Releases; and (iii) the 1998 Final Release.
17. *(i) The 1995 Settlement Agreement:* On 4 May 1995, the Respondent acting by its Ministry of Energy and Mining (here for convenience called “the Ministry”) and PetroEcuador as “one Party” and TexPet as “the other party” initialed and signed a written agreement entitled “Contract for Implementing of Environmental, Remedial Work and Release from Obligations, Liability and Claims”, for ease of reference described in these arbitration proceedings as the “1995 Settlement Agreement”.
18. The 1995 Settlement Agreement was made on the Ministry’s headed note-paper with the Respondent’s coat-of-arms; and it was signed for that Ministry by the Minister of Energy and Mines. It was also signed by a senior officer of PetroEcuador and two representatives of TexPet (now, but not then, indirectly owned by Chevron), one of whom was Dr Ricardo Reis Vega, a factual witness in Track I.
19. The 1995 Settlement Agreement provided in the final two paragraphs of its preamble that TexPet agreed to undertake the “Environmental Remedial Work in consideration for being released and discharged of all its legal and contractual obligations and liability for Environmental Impact arising out of the Consortium’s operations.” By Article 1.3, the term “Environmental Impact” included: “[a]ny solid, liquid, or gaseous substance present or released into the environment in such concentration or condition, the presence or release of which causes, or has the potential to cause harm to human health or the environment.”
20. As contemplated in the earlier 1994 MOU between the same signatory parties (which was to be substituted and become void by Article 9.6 and the last paragraph of Annex “A” of the 1995 Settlement Agreement), the 1995 Settlement Agreement, subject to its terms: (i) released TexPet from the Respondent’s and PetroEcuador’s claims based

upon Environmental Impact (except for claims related to TexPet’s performance of the Scope of Work); and (ii) provided that TexPet would be released from all remaining environmental liability upon completion of the remediation obligations described in that Scope of Work.

21. Article 1.12 of the 1995 Settlement Agreement defined such release, as follows: “The release, under the provisions of Article V of this Contract, of all legal and contractual obligations and liability, towards the Government and Petroecuador, for the Environmental Impact arising from the Operations of the Consortium, including any claims that the Government and Petroecuador have, or may have against Texpet, arising out of the Consortium Agreements.” The term “Operations of the Consortium” was defined as “Those oil exploration and production operations carried out under the Consortium Agreement”, i.e. the 1973 Concession Agreement (ibid).

22. Article 5.1 of the 1995 Settlement Agreement (“Article V”) in turn provided (inter alia):

“On the execution date of this Contract [i.e. 4 May 1995], and in consideration of Texpet’s agreement to perform the Environmental Remedial Work in accordance with the Scope of Work set out in Annex A, and the Remedial Action Plan, *the Government and Petroecuador shall hereby release, acquit and forever discharge Texpet, Texaco Petroleum Company, Compañía Texaco de Petróleos del Ecuador, S.A., Texaco Inc., and all their respective agents, servants, employees, officers, directors, legal representatives, insurers, attorneys, indemnitors, guarantors, heirs, administrators, executors, beneficiaries, successors, predecessors, principals and subsidiaries (hereinafter referred to as ‘the Releasees’)* of all the Government’s and Petroecuador’s claims against the Releasees for Environmental Impact arising from the Operations of the Consortium, except for those related to the obligations contracted hereunder for the performance by Texpet of the Scope of Work (Annex A) ...”

The Tribunal has here emphasised the wording critical to the Parties’ disputed interpretation of the 1995 Settlement Agreement, to which the Tribunal necessarily returns below. The Government’s “claims” were addressed in Article 5.2.

23. Article 5.2 of the 1995 Settlement Agreement provided:

“The Government and Petroecuador intend claims to mean any and all claims, rights to Claims, debts, liens, common or civil law or equitable causes of actions and penalties, whether sounding in contract or tort, constitutional, statutory, or regulatory causes of action and penalties (including, but not limited to, causes of action under Article 19-2 of the Political Constitution of the Republic of Ecuador, Decree No. 1459 of 1971, Decree No. 925 of 1973, the Water Act, R.O. 233 of 1973, ORO No. 530 of 1974, Decree No. 374 of 1976, Decree No. 101 of 1982, or Decree No. 2144 of 1989, or any other applicable law or regulation of the Republic of Ecuador), costs, lawsuits, settlements and attorneys’ fees (past, present, future, known or unknown), that the Government or Petroecuador have, or ever may have against each Releasee for or in any way related to contamination, that have or ever may arise in the future, directly or indirectly arising out of Operations of the Consortium, including but not limited to consequences of all types of injury that the Government or Petroecuador may allege concerning persons, properties, business, reputations, and all other types of injuries that may be measured in money, including but not limited to, trespass, nuisance, negligence, strict liability, breach of warranty, or any other theory or potential theory of recovery.”

The Tribunal has here again emphasised the wording most critical to the Parties’ disputed interpretation of the 1995 Settlement Agreement.

24. The reference in Article 5.2 to Article 19-2 of the Ecuadorian Constitution (being the 1978 Constitution effective in 1979 and, as later amended, in force in 1995) signified a cause of action available to the Respondent under Title II, Section 1 (On the Rights of People/Individuals¹) whereby the Ecuadorian State guaranteed to each person, inter alia (in English translation): “... the right to live in an environment that is free from contamination. It is the duty of the State to ensure that this right is not negatively affected and to foster the preservation of nature ...”. The fuller text of Article 19-2 in Spanish provides: “Sin perjuicio de otros derechos necesarios para el pleno desenvolvimiento moral y material que se deriva de la persona, el Estado le garantiza: El derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar por que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley establecerá las restricciones al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente”. The reference to Decree No. 374 of 1976

¹ The Claimants translate the Spanish term “las personas” as “people” or “persons” [D3.523]; and the Respondent as “individuals” and “persons” [D1.74 & D3.580]. In the Tribunal’s view, these differences in English translation are not material to its decisions in this Partial Award.

signified a cause of action available to the Respondent on the prevention and control of pollution. The reference to the Water Act of 1973 and Decree No. 2144 of 1989 signified causes of action available to the Respondent in regard to water resources and water contamination. The reference to ORO No 530 signified the Regulations for the Exploration and Exploration of Hydrocarbons of 9 April 1974.

25. The references to “the Government” in Articles 1.12 and 5 of the 1995 Settlement Agreement, rather than the Ministry, is explained by the facts that the 1973 Concession Agreement was made between (inter alios) TexPet and the Respondent’s Government (albeit acting by the Ministry) and that, as appears from the 1995 Settlement Agreement, the release was directed, in substantial part, to settling claims arising from that 1973 Concession Agreement (including its section 46). Moreover, Article 9.1 of 1995 Settlement Agreement as regards notices thereunder identified the Ministry as representing the Government. In any event, the Ministry, forming part of the Government, acted for the Government in concluding the 1995 Settlement Agreement and, constitutionally, the Respondent is therefore to be treated under Ecuadorian law as a signatory party to the 1995 Settlement Agreement.
26. Article 9.3 of the 1995 Settlement Agreement contained a “Whole Contract” provision: namely:

“This Contract contains all the terms and conditions agreed upon by the Parties hereto with respect to the Environmental Remedial Work and to all matters which in any way may affect said Environmental Remedial Work. No other agreements, oral or otherwise, regarding this Contract, shall be deemed to exist or to bind the Parties hereto.”

27. Article 9.4 curtailed any benefit for “a third party”, namely (under the Parties’ different English translations from the Spanish version)²:

The Claimants: “This Contract shall not be construed to confer any benefit on any third party not a Party to this Contract, nor shall it provide any rights to such third party to enforce its provisions.”

² As noted, the first English translation is advanced by the Claimants [D1.57-58]; and the second is advanced by the Respondent [D3.575]. In the Tribunal’s view, these differences are not material to its decisions in this Partial Award.

The Respondent: “This Contract shall not be construed to confer benefits on third parties who are not a part of this Contract, nor shall it provide rights to third parties to enforce its provisions.”

The term “third party” or “third parties” was not defined in the 1995 Settlement Agreement.

28. Annex “A” to the 1995 Settlement Agreement contained the Scope of the Environmental Remedial and Mitigation Work and Socio-Economic Compensation to be undertaken by TexPet. It was separately signed by the signatory parties. Section VII.C of Annex “A” provided:

“C. Negotiations with the Municipalities of Lago Agrio (Nueva Loja), Shushufindi, Joya de los Sachas and Francisco de Orellana (Coca).

Without prejudice to that agreed in this Scope of Remedial Work and in the Memorandum of Understanding of December 14, 1994, Texpet pledges to continue negotiations with the aforementioned Municipalities, in order to establish the participation of Texpet in the performance of the work based on projects on drinking water and/or construction of sewers and latrines in the corresponding canton seats. The results of such negotiations shall be independent from the current Scope and the Contract for Implementing the Environmental Remedial Work and Release of Obligations to be executed by the parties, nor shall they affect the performance of such Scope and Contract.

The work that cannot be covered with the funds arising from the negotiations with Texpet shall be supplemented pursuant to Art. 3 of Executive Decree 675 of April 15, 1993, published in Registro Oficial No.174 of the 22nd of the same month and year.”

29. The 1995 Settlement Agreement contained no express provision for applicable law(s), dispute settlement or forum selection. It is nonetheless common ground between the Parties (together with their respective expert witnesses) that Ecuadorian law applies to its interpretation and effect, that agreed approach being here confirmed by the Tribunal for the purpose of these arbitration proceedings under Article 33 of the UNCITRAL Arbitration Rules.
30. (ii) *The 1996 Municipal and Provincial Releases*: As provided by Annex “A” to the 1995 Settlement Agreement (cited above), TexPet subsequently settled disputes with the four municipalities of the Oriente Region (Shushufindi, Francisco de Orellana

(Coca), Lago Agrio and Joya de los Sachas), under written agreements made with these municipalities, as also the Province of Sucumbíos and the Napo consortium of municipalities (herein, for ease of reference, collectively called the “Municipal and Provincial Releases”). Under these six settlements, four of which were approved by the Ecuadorian courts owing to their nature as litigious disputes, TexPet, together with non-signatory parties (as explained below), were released from liability to these municipalities for the Consortium’s activities in the area of the concession. The Respondent, including its Ministry, were not signatory parties to these 1996 Municipal and Provincial Releases, which were of course all made after the 1995 Settlement Agreement. (The 1995 Settlement Agreement was not approved by any Ecuadorian court, not then having a litigious nature between its signatory parties).

31. The Municipal and Provincial Releases provided (inter alia) for a release in somewhat different terms from Article 5.1 of the 1995 Settlement Agreement. For example, the fifth provision of the Release of 2 May 1996 made by the Province of Sucumbíos extended to (as here translated into English): “ Texaco Petroleum Company, Texas Petroleum Company, Compañía Texaco de Petróleos del Ecuador, S.A., Texaco Inc., and any other affiliate, subsidiary or other related companies, and all their agents, employees, executives, directors, legal representatives, insurers, lawyers, guarantors, heirs, administrators, contractors, subcontractors, successors or predecessors”
32. (iii) *The 1998 Final Release*: On 30 September 1998, pursuant to the 1995 Settlement Agreement, the Respondent (acting by its Minister of Energy and Mines), PetroEcuador, PetroProduccion and TexPet executed the *Acta Final*, certifying that TexPet had performed all its obligations under the 1995 Settlement Agreement and, in accordance with its terms, releasing TexPet from (as specified) any environmental liability arising from the Consortium’s operations.
33. Article IV of the Final Release provided (inter alia) as follows, in English translation:

“ ... The Government and PetroEcuador proceed to release, absolve and discharge TexPet, Texas Petroleum Company, Compañía Texaco de Petróleos del Ecuador, S.A., Texaco Inc., and all their respective agents, servants, employees, officers, directors, legal representatives, insurers, attorneys, indemnitors, guarantors, heirs, administrators, executors, beneficiaries, successors, predecessors, principals and

subsidiaries forever, from any liability and claims by the Government of the Republic of Ecuador, PetroEcuador and its Affiliates, for items related to the obligations assumed by TexPet in the aforementioned Contract [the 1995 Settlement Agreement]”

The Tribunal notes that the critical contractual wording at issue in Article 5.1 of the 1995 Settlement Agreement is materially the same in Article IV of the Final Release; and, accordingly, the issues relating to the latter’s interpretation and effect are here treated as the same issues relating to the 1995 Settlement Agreement.

PART C: THE PARTIES' RESPECTIVE CASES

34. *Introduction:* In the Tribunal's view, as explained later in this Partial Award, the Parties' disputed interpretation turns upon a few crucial Spanish words in Article 5 of the 1995 Settlement Agreement to be construed under the relevant rules of Ecuadorian law on contractual interpretation. Although the materials submitted by the Parties are voluminous, the essential issues of legal interpretation, whilst perhaps difficult, are relatively short and uncomplicated.
35. Given also the limited approach taken by the Tribunal in this Partial Award as to the legal effect of that interpretation under Ecuadorian law, it is unnecessary here to summarise in full the Parties' respective cases relating to Track I. In particular, as explained further below, the Tribunal does not here decide the full legal effect of the 1995 Settlement Agreement (with the 1998 Final Release) as claimed in the Parties' respective claims for relief, as set out below later in this Part C.
36. The Tribunal has nonetheless considered the Parties' submissions and claimed relief at length; and the omission here of any reference to any part of such cases should not be taken as signifying otherwise. However, apart from issues and relief already reserved to Track II and given that part of the issues under Track I are here deferred to Track II by decision of the Tribunal, any part of such case not here addressed should not be taken as having been implicitly decided by the Tribunal one way or the other in this Partial Award.
37. *The Claimants' Case:* In summary, the Claimants contend that, under Ecuadorian law, Chevron is a "Releasee" under Article 5.1 of the 1995 Settlement Agreement and is also not an excluded "third party" beneficiary under Article 9.4 prevented from exercising its contractual rights in full as a Releasee, directly by itself or indirectly through TexPet. The Claimants submit that Chevron, following the 'reverse triangular merger' with Texaco Inc. ("Texaco") between 15 October 2000 and 1 November 2001, became TexPet's indirect owner, controller and ultimate parent company, thereby falling within the meaning of the Spanish term "principales" listed for release in Article 5.1 of the 1995 Settlement Agreement. The Claimants emphasise that the

contrary argument is made by the Respondent for the very first time in these arbitration proceedings.

38. The Claimants assert that Chevron, Texaco and TexPet were and remain separate and distinct corporations; and that, whilst Chevron is not the “successor-in-interest” with regard to any of liabilities of Texaco or TexPet, Chevron submits that the context of the term “principales” in Article 5.1 shows an objective intent under Ecuadorian law to release future parent corporations (such as Chevron) and does not signify only a principal in a principal-agent relationship. The Claimants invoke three particular points in support of their case.
39. First, a “holistic” reading of Article 5.1 reveals the Parties’ objective intent to release parent corporations because the long and broad list of 22 categories of Releasees establishes an intent to release broadly all individuals and companies which might ever be alleged to be responsible for the conduct of TexPet, necessarily including a future parent company of TexPet. Conversely, with such an extensive list (including expressly TexPet’s existing parent company, Texaco), there is no evidence from this contractual wording of any intent to exclude any future parent company as a Releasee.
40. Second, when coupled with “subsidiarias” in Article 5.1, the common legal and business language use of “principales” signifies a parent company. As submitted in paragraph 222 of the Claimants’ Reply Memorial - Track I:

“A grammatical analysis of the phrase *principales y subsidiarias* is revealing of their meaning and use. Linguistically, the terms *principales y subsidiarias*, as used in Article 5.1, are attributive nouns - that is, they are adjectives acting as nouns in this instance. This linguistic phenomenon, known as the “attributive noun” or “nominalization of the adjective” (in Spanish, “*sustantivación del adjetivo*”), occurs when the noun that the adjective complements is not included in the sentence, causing the adjective to become the noun in the phrase by taking the place of the missing noun. In this case, *principales y subsidiarias* is short form for *las compañías principales y subsidiarias* (principal and subsidiary companies). The parties omitted the word “companies,” thereby transforming *principales y subsidiarias* into nouns. The phenomenon of the attributive noun occurs frequently in the Spanish language, and its use is well documented [citation omitted]. It also occurs frequently in English [citation omitted]. For instance, the word *subsidiary* is an attributive noun for the full phrase *subsidiary corporation* [citation omitted]. The fact that the Spanish *subsidiarias* is in the feminine gender (which coordinates with *compañías* [companies] *corporaciones* (corporations), *sociedades* (companies or societies),

entidades (entities), or *empresas* (enterprises) - all feminine nouns) further supports this reading [citation omitted]. This analysis is important because, as shown below [paragraphs 220ff], in the Spanish legal and business contexts, *principales* and *subsidiarias* are often used as nouns and adjectives, always maintaining their core meaning.”

41. The Claimants therefore reject as inapposite the Respondent’s reliance upon the Ecuadorian Commercial Code which defines “principales” as a principal corresponding to agency; and they refer to the supporting expert testimony of Dr Coronel and Dr Barros to such effect. Given the common use of the term “principales” to mean a parent company when paired with the term “subsidiarias”, the Claimants submit that it would be implausible that, in drafting Article 5.1, there was any objective intention to displace its ordinary meaning with a narrow technical meaning drawn from the law of agency.

42. Third, the context of the word “principales” within the 1995 Settlement Agreement shows an objective intention to mean parent corporations; and, under Ecuadorian law, the interpretation of a contractual term is to be made in its contractual context, as provided by Article 1580 of the Civil Code. Such contractual context here comprises (paragraph 229, *ibid*):
 - “(i) The pairing of *principales* with *subsidiarias* (as in *principales y subsidiarias*) shows the intent to use them as correlatives;
 - (ii) The term *principales* is not coupled with *agentes*, which appears at the opposite end of the long list of Releasees (there are 15 categories of releasees separating them), which evidences an intent not to give *principales* a meaning within the agency context;
 - (iii) Article 1.12 of the 1995 Settlement Agreement shows an overall intent to cover all persons related to TexPet;
 - (iv) The Settlement Agreement’s express naming of Texaco Inc. and its successors evidences an intent to cover all present and future owners and parent companies that enter the corporate structure; and
 - (v) A harmonious and good-faith interpretation militates against an interpretation that covers only current affiliate companies in the corporate ownership structure, but excludes future companies.”

43. The Claimants contend that the 1996 Municipal and Provincial Releases are relevant, under Ecuadorian law, to the interpretation of the 1995 Settlement Agreement because, with the 1998 Final Release, they all form part of the same overall transaction with mutual cross-references. Under the different wording of those 1996

Releases, Chevron would manifestly benefit from a release as TexPet's parent company; and accordingly the Claimants submit that this contractual documentation evidences a common intention in related transactions to release a future parent company of TexPet in the absence of any objective evidence indicating any contrary intention.

44. The Claimants also contend that Article 9.4 of the 1995 Settlement Agreement does not preclude unnamed non-signatory "Releasees" from enforcing their contractual rights against the Respondent affirmatively. A Releasee is not a third party to the 1995 Settlement Agreement, but a party to or part of such Agreement, as the Respondent had originally conceded in Paragraph 134 of its Reply Memorial on Jurisdiction. With such contractual rights, so the Claimants contend, there is nothing in the 1995 Settlement Agreement to indicate that these rights can only be exercised by any Releasee defensively and not offensively, by way of a claim for damages, declaratory relief or specific performance against the Respondent.
45. As to the legal effect of their interpretation, it is the Claimants' case that the causes of action expressly described in Article 5.2 of the 1995 Settlement Agreement and for which Chevron is released as a Releasee include all "collective" or "diffuse" environmental rights exercisable only by the Respondent in the general public interest "on behalf of the community" (which were therefore capable of settlement and release by the Respondent under the 1995 Settlement Agreement), as distinct from causes of action available to private individuals making claims for their own personal harm caused by environmental pollution (which were not compromised under the 1995 Settlement Agreement). The Claimants' case relies (inter alia) upon the expert testimony of Dr Barros, Dr Coronel and Professor Oquendo.
46. The Claimants acknowledge that the 1995 Settlement Agreement was not intended to bar and does not bar any environmental claims by individuals for personal harm suffered by those individuals, including other so-called "cow claims". At the time when the 1995 Settlement Agreement was made, whilst collective and diffuse rights existed under Ecuadorian law, according to the Claimants, no private individual without a claim for personal harm had legal standing to bring any environmental claim (for remediation or damages) in respect of such collective or diffuse rights. As

explained by Counsel for Chevron in its closing oral submissions: "... I don't think it has to do with the nature of the right itself, because the right did exist [in 1995]. The right was there. It's that the right could be exercised by the Government on behalf of the people to protect the people but there wasn't a direct action by the people to enforce that" and "... before the EMA in 1999 [i.e. the 1999 Environmental Management Act], the Aguinda plaintiffs did not have standing to vindicate the diffuse rights of the community. That was left to the Government, the Government had that power and that standing" [D3.529 & 541].

47. The Claimants contend that the Lago Agrio Litigation, in contrast to the earlier Aguinda Litigation in New York, concerns environmental claims for collective or diffuse rights for unidentified persons which are precluded by the release in the 1995 Settlement Agreement, as a matter of res judicata and collateral estoppel under Ecuadorian law applicable to settlements (Article 2362 of the Civil Code³ and/or by analogy of law under Article 18 of the Civil Code); and that none of these claims are made by private individuals for their own personal harm, in contrast to the claims by identifiable persons made in the Aguinda Litigation in New York which involved only individual rights, with claims in respect of personal harm.
48. *The Claimants' Claimed Relief:* As regards the formal relief claimed by the Claimants in regard to the 1995 Settlement Agreement, it is necessary to recite in full Paragraph 272 of the Claimants Reply Memorial – Track I, as follows:

"272. Accordingly, Claimants request a Partial Award that effectively protects Claimants' rights, and reverses (as far as possible) the harmful effects of Ecuador's breaches of the Settlement Agreements [i.e. the 1995 Settlement Agreement and 1998 Final Release] and its international-law obligations. To achieve this result, Claimants respectfully submit the following list of requests, from which the Tribunal can fashion a combination of declaratory, injunctive, and monetary relief in protection of Claimants' rights [footnote here omitted].

A. Specific Performance

1. Order that Ecuador specifically perform the Settlement Agreements.

³ Article 2362 of the Civil Code in its original Spanish provides as follows: "*La transacción surte el efecto de cosa juzgada en última instancia; pero podrá pedirse la declaración de nulidad o la rescisión, en conformidad a los artículos precedentes*".

B. Declaratory Relief

(i) Scope of the Settlement Agreements

1. Declare that both Claimants are “Releasees” under the Settlement Agreements, and were released from all diffuse environmental claims arising from TexPet’s operations in Ecuador; and
2. Declare that the claims pleaded in the Lago Agrio Litigation (and upon which the Lago Agrio Judgment is based) are the same diffuse environmental claims settled and released in the Settlement Agreements.

(ii) Legal Effect of the Settlement Agreements

1. Declare that Claimants have no liability or responsibility for satisfying the Lago Agrio Judgment because they were fully released for all such claims by the Settlement Agreements;
2. Declare that the claims pleaded in the Lago Agrio Litigation (and upon which the Lago Agrio Judgment were based) are barred by *res judicata* and collateral estoppel;
3. Declare that under the Settlement Agreements, Claimants have no further liability or responsibility for diffuse environmental claims in Ecuador for Environmental Impact arising out of the Consortium’s operations, or for performing any further environmental remediation;
4. Declare that Ecuador (through its various branches of Government) has breached the Settlement Agreements, *inter alia*, by refusing to specifically perform the Settlement Agreements, by refusing to ensure Claimants’ enjoyment of their releases and their right to be free of litigation, by refusing to dismiss the Lago Agrio Plaintiffs’ claims, by refusing to indemnify Chevron for the Lago Agrio Plaintiffs’ claims, by seeking to comply with this Tribunal’s Interim Awards;
5. Declare that Ecuador’s actions have breached the U.S.-Ecuador BIT, including its obligations to afford fair and equitable treatment, full protection and security, effective means of enforcing rights, and to observe obligations it entered into under the overall investment agreements;
6. Declare that enforcement of the Lago Agrio Judgment within or without Ecuador would be inconsistent with Ecuador’s obligations under the Settlement Agreements, the BIT and international law;
7. Declare that the Lago Agrio Judgment is a nullity as a matter of international law; and

8. Declare that: (i) the Judgment is not final, enforceable, or conclusive under Ecuadorian and international law, and thus, is not subject to recognition and enforcement within or without Ecuador; (ii) any enforcement of the Judgment would place Ecuador in violation of its international-law obligations; (iii) the Judgment violates international public policy and natural justice, and as a matter of international comity and public policy, the Judgment should not be recognized and enforced.

C. Injunctive Relief

1. Order Ecuador to use all measures necessary to comply with its obligations under the Settlement Agreements to release Claimants (and to ensure that Claimants may effectively enjoy the benefits of such releases) from any liability or responsibility for the Lago Agrio Judgment in Ecuador or in any other country;

2. Order Ecuador to use all measures necessary to prevent the Lago Agrio Judgment from becoming final, conclusive, or enforceable in Ecuador or in any other country;

3. Order Ecuador to use all measures necessary to stay or enjoin enforcement of the Lago Agrio Judgment, including enjoining the Lago Agrio Plaintiffs from obtaining any related attachments, levies, or other enforcement devices in Ecuador or in any other country;

4. Order Ecuador to use all measures necessary to revoke and nullify the Judgment;

5. Order Ecuador to make a written representation to any court in which the Lago Agrio Plaintiffs attempt to recognize and enforce the Lago Agrio Judgment that: (i) the claims that formed the basis of the Judgment were released by the Government; (ii) the Lago Agrio Court had no personal or subject-matter jurisdiction over Chevron; (iii) the Judgment is a legal nullity; (iv) the Judgment is not final, enforceable, or conclusive under Ecuadorian and international law, and thus, is not subject to recognition and enforcement within or without Ecuador; (v) any enforcement of the Judgment would place Ecuador in violation of its international-law obligations; (vi) the Judgment violates international public policy and natural justice; (vii) any enforcement proceedings should be stayed pending the Tribunal's final award in this arbitration; and (viii) as a matter of international comity and public policy, the Judgment should not be recognized and enforced; and

6. Order that, in the event that any court orders the recognition or enforcement of the Lago Agrio Judgment, Ecuador must satisfy the Judgment directly.

D. Damages, Costs and Attorneys' Fees

1. Award Claimants full indemnification and damages against Ecuador in connection with the Lago Agrio Judgment, including a specific obligation by Ecuador to pay Claimants the sum of money awarded in the Judgment;

2. Award Claimants any sums of money that the Lago Agrio Plaintiffs or others collect against Claimants or their affiliates in connection with enforcing the Judgment in any forum, with such sums to be paid by Respondent;

3. Award all costs and attorneys' fees incurred by Claimants in (i) defending the Lago Agrio Litigation, (ii) pursuing this arbitration, (iii) opposing the efforts by Ecuador and the Lago Agrio Plaintiffs to stay this arbitration through litigation in the United States; and (iv) preparing for and defending against enforcement actions brought by the Lago Agrio Plaintiffs. These amounts will be quantified at the time and in the manner ordered by this Tribunal;
 4. Award both pre- and post-award interest (compounded quarterly) until the date of payment; and
 5. Award such other and further relief that the Tribunal deems just and proper, including any specific relief appropriate to wipe out all consequences of Respondent's breaches of the Settlement Agreements and its violations of its obligations under the Interim Awards, the BIT and international law."
49. The Tribunal has here recited such relief in full, although it exceeds in part the issues intended to be addressed in Track I under the Tribunal's Procedural Order No 10. The Tribunal has also taken note of the Claimants' written requests for relief submitted by their Counsel at the November Hearing made in materially similar terms [D1.31].
50. *The Respondent's Case:* In summary, the Respondent denies that under Ecuadorian law Chevron is a "Releasee" under Article 5.1 or otherwise entitled to take advantage of the 1995 Settlement Agreement, to which it is an excluded "third party" under Article 9.4. Further, even if Chevron were a Releasee, the 1995 Settlement Agreement creates under Ecuadorian law no res judicata effect (nor any collateral estoppel) upon any of the plaintiffs' claims in the Lago Agrio Litigation.
51. As already noted, the Respondent takes issue with the Claimants' interpretation of Article 5.1 of the 1995 Settlement Agreement. The Respondent submits that the Claimants' characterisation of Chevron as TexPet's "principal" within the list of "Releasees" is misplaced because it is based only upon Chevron's indirect shareholding in TexPet, rather than on any relationship of principal and agent between Chevron and TexPet, as required by the contractual wording.
52. As to agency, the Respondent contends that Chevron has consistently denied any agency relationship with TexPet. The Respondent further contends that, even if there were any agency relationship between Chevron and TexPet following the merger between Texaco and Chevron, there could have been no agency relationship in

relation to TexPet's operations which caused environmental damage since those operations had ended in 1992, some nine years before that merger.

53. The Respondent contends that Chevron cannot therefore be a "Releasee" under Article 5.1 of the 1995 Settlement Agreement because it is not there specified by name and the relevant evidence does not establish any intention to derogate from the plain meaning of the contractual terms, to be interpreted under Ecuadorian law. Under Ecuadorian law, the word "principales" refers only to the principal in the ordinary principal-agent representative relationship, thereby excluding Chevron.
54. As to the Claimants' arguments based on the comprehensive nature of the list of Releasees in Article 5.1, the Respondent relies upon the Latin maxim 'inclusio unius est exclusio alterius' as a canon of construction under Ecuadorian law. The Respondent rejects the relevance of the 1996 Municipal and Provincial Releases as an aid to interpreting the Article 5.1 because the Respondent did not agree such a release in Article 5.1, which is differently worded and made between different signatory parties; and, in any event, such materials are excluded from consideration by virtue of Article 9.3 of the 1995 Settlement Agreement. As to the Claimants' linguistic arguments, the Respondent contends that the Spanish word "matriz" means parent company and that "principales" is not its substitute as an attributive noun; and in any event, if all parent companies had been intended to be released, that the Spanish term "las compañías" would have been used in Article 5.1. As to contractual context, the Respondent submits that there is no context in which the adjective "principales", without being further defined, could ever serve to release all future parent companies in a contract governed by Ecuadorian law. Lastly, in the event of any ambiguity in the interpretation of Article 5.1, the Respondent contends that such ambiguity must be resolved in favour of the Respondent as the obligor under Article 1582 of the Ecuadorian Civil Code, as supported by the expert testimony of Professor Salgado.
55. Even if Chevron were a Releasee within Article 5.1, the Respondent contends that Article 9.4 of the 1995 Settlement Agreement expressly prohibits any person other than the signatory parties from exercising the right, offensively, to bring a claim under the terms of the 1995 Settlement Agreement. Under its corrected translation (the second set out in Paragraph 27 above), whilst the Respondent accepts that a non-

signatory Releasee is “part of” the 1995 Settlement Agreement, the Respondent submits that such a Releasee is nonetheless a third party and, as such, acquires no rights to enforce the provisions of the 1995 Settlement Agreement, as also supported by the expert testimony of Professor Salgado.

56. This disability is not cured, according to the Respondent, by TexPet as a signatory party and the Second Claimant in these arbitration proceedings because TexPet has no standing to bring any contractual claim for breach of the 1995 Settlement Agreement. Under Article 1465 of the Ecuadorian Civil Code,⁴ TexPet was free to contract in favour of a third person, but only that third person can sue for itself under that contract and accordingly TexPet cannot bring any claim in these proceedings for the benefit of Chevron under the 1995 Settlement Agreement; nor can TexPet bring any claim thereunder for itself not being a party to the Lago Agrio Litigation.
57. Whether or not Chevron is a Releasee, it is the Respondent’s further case that, in agreeing the releases in Article 15.2, the Respondent was not acting in any representational capacity exercising “diffuse” or “collective rights” on behalf of Ecuadorian individuals but acting only in its capacity as a co-contractual party to the 1973 Concession Agreement. As regards the former, Counsel for the Respondent explained in its closing oral submissions: “There was no law in 1995 that recognized diffuse rights. The concept of collective rights was introduced in Ecuadorian legislation for the first time in the 1998 Constitution, or the constitutional reform of 1998, and the concept of diffuse interest was defined for the first time in 1999, one year later in the Environmental Management Act referred to as EMA” [D3.579-580].
58. Further, as the laws of Ecuador stood in 1995, the Respondent submits that it had no power to represent the Ecuadorian people in regard to their individual rights and that individuals could bring personal claims and recover damages under Article 19-2 of the Ecuadorian Constitution, referring to (inter alia) the court decisions in the

⁴ Article 1465 of the Civil Code in its original Spanish provides as follows: “*Cualquiera puede estipular a favor de una tercera persona, aunque no tenga derecho para representarla; pero sólo esa tercera persona podrá demandar lo estipulado; y mientras no intervenga su aceptación expresa o tácita, es revocable el contrato por la sola voluntad de las partes que concurrieron a él. Constituyen aceptación tácita los actos que sólo hubieran podido ejecutarse en virtud del contrato*”.

Gutiérrez case of 29 September 1993 and, albeit after 1995, the Delfina Torres case of 19 March 2003.⁵ As regards diffuse rights existing under Article 19-2 at the time of the 1995 Settlement Agreement, the Respondent contends that “collective” or “diffuse” environmental rights did not exist under Ecuadorian law until 1998/1999, after the 1995 Settlement Agreement and 1998 Final Release [D1.158ffx & D1.187ffxx].

59. Accordingly, the Respondent contends that the 1995 Settlement Agreement was not intended to bar and could not create any bar under Ecuadorian law to individuals later bringing claims for environmental remediation (after 1999), both as individual claims for personal harm and also as claims for “diffuse” or “collective rights” under Article 19-2 or any of the other provisions of Ecuadorian law listed in Article 5.2. The Respondent relies (inter alia) upon the expert testimony of Professors Eguiguren and Professor Le Chatelier.
60. *The Respondent’s Claimed Relief:* It is likewise necessary to set out in full below the relief requested by the Respondent in Track I, as pleaded in Paragraph 192 of its Rejoinder on the Merits – Track I (here with added paragraph numbers):

“192. Based on the foregoing, the Republic respectfully requests that the Tribunal issue an Award that:

- (i) Denies all the relief and each remedy requested by Claimants in relation to Track 1, including the relief and remedies requested in Paragraph 272 of Claimants’ Reply on the Merits [recited above];
- (ii) Declares that Chevron is not a “Releasee” under the 1995 Settlement Agreement and therefore has no basis to assert claims under Article VI(1)(a) of the Treaty;
- (iii) Dismisses Chevron’s claims under the 1995 Settlement Agreement and the 1998 Final Release on the merits, should the Tribunal find that Chevron has standing in this Arbitration as a matter of jurisdiction;
- (iv) Declares that TexPet does not have standing to assert claims under the 1995 Settlement Agreement as a matter of Ecuadorian law;
- (v) Dismisses TexPet’s claims under the 1995 Settlement Agreement and the 1998 Final Release on the merits;

⁵ The Angel Gutiérrez case of 29 September 1993, Quito, Judicial Gazette, Year XCIV, Series XVI, No 1, p 11 [RLA-285]; and the Delfina Torres case of 19 March 2003, Quito,, File 229, Official Register 43 [RLA-286].

- (vi) Declares specifically that the Respondent has not breached the 1995 Settlement Agreement or the 1998 Final Release;
- (vii) Dismisses all of Claimants' claims as they relate to the 1996 Local Settlements [i.e. the 1996 Municipal and Provincial Releases], both as a matter of jurisdiction and on the merits;
- (viii) Declares further that the Respondent is under no obligation to indemnify, protect, defend or otherwise hold Claimants harmless against claims by, or judgments or other relief obtained by, third parties including the claims filed by the Lago Agrio Plaintiffs, the Lago Agrio Judgment, and the enforcement thereof;
- (ix) Declares that the 1995 Settlement Agreement has no effect on third parties, and specifically, that the release of liability contained therein does not extend to rights and claims potentially held by third parties or could otherwise bar third-party claims arising from the environmental impact;
- (x) Declares that the Lago Agrio Litigation was not barred by res judicata or collateral estoppel;
- (xi) Awards Respondent all costs and attorneys' fees incurred by Respondent in connection with this phase of the proceedings; and that
- (xii) Awards Respondent any further relief that the Tribunal deems just and proper."

61. As the Respondent recognised at the time of the November Hearing, this requested relief, pleaded in direct response to the Claimants' requested relief extending beyond the issues under Track I, itself extends in part beyond Track I.

PART D: THE TRIBUNAL'S ANALYSES AND DECISIONS

62. *I Introduction – Legal Interpretation:* As already indicated above, the Tribunal considers that the relevant issues of contractual interpretation under the 1995 Settlement Agreement are, ultimately, relatively short and uncomplicated. The Tribunal sets out below the relevant Ecuadorian rules on contractual interpretation, followed by an analysis of the testimony by the Parties' expert witnesses relevant to the issues of contractual interpretation, before analyzing and deciding upon its own interpretation of the 1995 Settlement Agreement.
63. (i) *The Relevant Rules:* The Parties agree that the 1995 Settlement Agreement should be interpreted in the light of Ecuadorian law as at the time when it was executed [D3.507 & D3.577]. The Parties also referred to the joint expert report of Dr Enrique Barros, Dr César Coronel and Professor Roberto Salgado of 6 August 2012 which contains a helpful summary of the Ecuadorian legal rules of contractual interpretation relevant to the 1995 Settlement Agreement, as agreed by these Parties' three expert witnesses. The Tribunal is content to adopt and apply these rules for the purpose of this Partial Award, as follows (here translated from the original Spanish):
- “(i) For purposes of interpreting the aforementioned contract signed in Ecuador, Ecuadorian laws are the applicable laws.
- (ii) The laws in effect when the agreement was executed must also be understood to be incorporated into the contract (Article 7, number eighteen, Civil Code).^[6]
- (iii) The Ecuadorian rules for interpreting the contract are those established in Title XIII of the Fourth Book of the Civil Code, Articles 1576 – 1582.
- (iv) The relevant rules ... are essentially the following:
- [a] No matter how general the terms of a contract are, they will apply only to the matter which the parties have contracted about (Article 1577).^[7]

⁶ Article 7 of the Civil Code provides in its original Spanish, in relevant part: “*La ley no dispone sino para lo venidero: no tiene efecto retroactivo; y en conflicto de una ley posterior con otra anterior, se observarán las reglas siguientes: En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración*”.

- [b] The meaning in which an article can produce some effect must take precedence over that in which it cannot produce any effect at all (Article 1578).^[8]
- [c] In those cases where there is no contrary intent, the interpretation that best squares with the nature of the contract must be adhered to (Article 1579).^[9]
- [d] The articles of a contract will be interpreted in light of the others, according to each the meaning that best suits the contract as a whole (Article 1580, first subsection).^[10]
- [e] If none of the above rules of interpretation are applicable, ambiguous articles will be interpreted in favor of the obligor. But the ambiguous articles that have been drafted or dictated by one of the parties, whether obligee or obligor, will be interpreted against that party, provided that the ambiguity stems from a lack of an explanation that that party should have provided.^[11]”

64. (ii) *The Expert Testimony*: The Tribunal here addresses (in summary) the expert testimony on the contractual meaning of the word “principales” under Ecuadorian law in Article 5.1 of the 1995 Settlement Agreement.
65. The written reports of the Claimants’ expert witnesses, principally the Second Expert Report of Dr Barros (the “Barros Report”) and the Second Expert Report of Dr Coronel (the “Coronel Report”), support the Claimants’ case that “principales” means a parent company in Article 5.1. Since Chevron is a legal person indirectly controlling

⁷ Article 1577 of the Civil Code in its original Spanish provides as follows: “*Por generales que sean los términos de un contrato, sólo se aplicarán a la materia sobre que se ha contratado*”.

⁸ Article 1578 of the Civil Code in its original Spanish provides as follows: “*El sentido en que una cláusula puede surtir algún efecto deberá preferirse a aquél en que no sea capaz de surtir efecto alguno*”.

⁹ Article 1579 of the Civil Code in its original Spanish provides as follows: “*En los casos en que no apareciere voluntad contraria, deberá estarse a la interpretación que más bien cuadre la naturaleza del contrato. Las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen*”.

¹⁰ Article 1580 of the Civil Code in its original Spanish provides as follows: “*Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándose a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. Podrán también interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia. O por la aplicación práctica que hayan hecho de ella ambas partes, o una de las partes con aprobación de la otra*”.

¹¹ Article 1582 of the Civil Code in its original Spanish provides as follows: “*No pudiendo aplicarse ninguna de las reglas precedentes de interpretación, se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor. Pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella*”.

and owning TexPet and is therefore to be regarded as a parent company, these two expert witnesses conclude that Chevron is a Releasee under Article 5.1 of the 1995 Settlement Agreement (and also Article IV of the Final Release).

66. The Barros Report (paragraphs 23 to 35) places special emphasis on the fact that the terms “principales y subsidiarias” are used jointly in the same phrase in Article 5.1, lines 8-9, of the 1995 Settlement Agreement. Dr Barros takes the view that in such a context “principales” refers not to any principal-agent relationship under agency law, but to the parent or controlling company/subsidiary relationship from the perspective of company law.
67. Amongst other factors, Dr Barros indicates that: (a) if the parties had wished to use the term “principales” within the context of an agency relationship, they would have mentioned it together with the terms “agentes” or “mandatarios” found at line 6 of Article 5.1, which was not the case (paragraph 26 of the Barros Report); and (b) a harmonious interpretation (paragraph 31 of the Barros Report) and a good faith interpretation (paragraph 33 of the Barros Report) of the 1995 Settlement Agreement and its Article 5.1 militate against construing the release as only covering companies or persons in the ownership structure (including TexPet), as such structure then was and not also companies or persons that come into that same structure at a later date (after 1995). Dr Barros points out that a contrary interpretation of Article 5.1 would mean that officers in charge of TexPet when the release was agreed would be covered as Releasees but not its future officers who could be still held liable (paragraph 29); and that such an interpretation would not make any sense.
68. This contextual interpretation is supported by the Coronel Report. Dr Coronel expresses the view that, through the linkage between the words “principales” and “subsidiarias”, Article 5.1 should be interpreted to mean that companies above and below those there mentioned by name are covered as Releasees, thereby including Chevron (paragraph 19). In this respect, Dr Coronel also refers specifically to the

provisions of the Civil Code: Article 1465, Article 1562,¹² Article 1576, Article 1578 and Article 1580 (Coronel Report, paragraphs 11-15).

69. By relying upon Articles 1576 and 1580 of the Civil Code, Dr Coronel concludes that a joint reading of the definition of the release in Articles 1.12 and 5.1 of the 1995 Settlement Agreement confirms the signatory parties' intention not only to release TexPet but also "all persons and entities related to TexPet" (Coronel Report, paragraph 20). He testifies that Article 1.12 broadly extends the release to both legal and contractual obligations and responsibility to the Government and PetroEcuador resulting from the Consortium's Operations and relating to the environment (not limited to TexPet), and that the broad listing of related entities covered by Article 5.1 evinces an intention to extend the release broadly to companies, entities and persons not expressly mentioned or identified by name in Article 5.1.
70. In particular, Dr Coronel concludes as regards Article 5.1 that: (a) the release covers Texaco, which was then the indirect controlling and owning parent of TexPet, which means that it should also extend to companies becoming in the future the indirect controlling and owning parent of TexPet; and (b) the reference to "successors" indicates that entities not expressly listed by name in its text could still benefit from the release. Dr Coronel states that when the 1995 Settlement Agreement was executed it was impossible to know or even to predict that Chevron (or any other person or company) would become the controlling and/or owning parent of TexPet. Since the highest parent corporation at that time was expressly covered by the release (i.e. Texaco), a logical approach to this provision requires its meaning to cover within the release any future company replacing Texaco as TexPet's parent (Coronel Report, paragraph 20). In that sense (and only in that sense), according to Dr Coronel, Chevron is a "successor" of Texaco; i.e., Texaco was replaced with Chevron as an indirect controlling shareholder and parent of TexPet.

¹² Article 1562 of the Civil Code in its original Spanish provides as follows: "*Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan, no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que, por la ley o la costumbre, pertenecen a ella*".

71. Neither Dr Barros Report nor Dr Coronel Report denies that the term “principales”, outside the specific context in which such term is used in Article 5.1 but within the context of an agency relationship, can mean a principal or “mandante”. In this connection, as earlier noted in its Third Interim Award (paragraph 4.48), the Tribunal records that the Diccionario de la Real Academia Española defines “principal” as follows: (i) 19th Edition (1970): “For. El que da poder a otro para que lo represente, poderdante”; and (ii) 22nd (last) Edition (2001): “Der. Poderdante”. In other words, within a technical legal context (this is what the references For. or Der. stand for) “principal” means: who grants a power of attorney in fact).
72. The Tribunal notes that examples in which such term has been used differently in the technical context of Ecuadorian corporate law (Barros Report, paragraph 25) are exceptional, as shown in the reports of the Respondent’s expert witness, Professor Roberto Salgado Valdez, in particular his first report (the “Salgado Report”).
73. However, the Salgado Report does not go much beyond pointing out the technical legal meaning of the term “principal”; and, in the Tribunal’s view, there is no compelling argument refuting the contextual interpretation advanced in the Barros and Coronel Reports. Professor Salgado limits himself to denying that interpretation (e.g. paragraph 20 of the Salgado Report), without addressing the analysis advanced in the Coronel and Barros Reports. Professor Salgado’s subsequent testimony does not materially alter the position.
74. *(iii) The Tribunal’s Analysis as to Legal Interpretation:* The Tribunal considers that it falls within its task to interpret for itself the contractual wording applying the relevant rules under Ecuadorian law and not merely to adopt the conclusions reached by any one or more of the Parties’ expert witnesses. Moreover, the Tribunal notes that there may be differences in approach taken by certain of these expert witnesses and the cases advanced by the Parties presenting them as expert witnesses.
75. As with all issues of contractual interpretation, it is necessary to start with the actual wording at issue, as here expressly required by Article 33(3) of the UNCITRAL Arbitration Rules. Moreover, in the Tribunal’s view, that contractual wording, being

agreed by all three signatories, is by far the best objective evidence of their common intentions under Ecuadorian law.

76. *Article 9.3*: The Tribunal first takes account of the whole agreement provision in Article 9.3 of the 1995 Settlement Agreement. Its terms are unambiguous (recited in Part B above, in English translation). For these reasons, in regard to the interpretation of the 1995 Settlement Agreement, the Tribunal derives no material assistance from Dr Veiga's testimony or from the terms of the release contained in any of the 1996 Municipal and Provincial Releases, as invoked by the Claimants.
77. *The Release*: From the 1995 Settlement Agreement itself, the Tribunal notes that it takes the form of a bipartite and not a tripartite agreement, notwithstanding its three signatories. Its signatories are the same signatory parties to the 1973 Concession Agreement (as modified with PetroEcuador's novation in 1976) and the 1994 MOU. In the Tribunal's view, it is clear from this background (as expressly set out in its preamble and terms) that the 1995 Settlement Agreement (with the 1998 Final Release) was intended to address "forever" all possible environmental claims by the Respondent and PetroEcuador on the one side against TexPet on the other side which had arisen or could conceivably arise from the Consortium's operations under the 1973 Concession Agreement in the Oriente region of Ecuador, together with the other nine agreements listed in its Annex B.
78. Given the nature of environmental claims, these claims could not be limited to contractual claims against TexPet but extended to all "legal" claims, thereby including non-contractual claims, as described in the preamble's last paragraph: "... Texpet agrees to undertake such Environmental Remedial Work in consideration for being released and discharged of all its legal and contractual obligations and liability for Environmental Impact arising out of the Consortium's operations; ...". Further, Article 1.12 defines the release in Article 5 as extending to "all legal and contractual obligations and liability, towards the Government and Petroecuador ..."; and Article 5.2 addresses "any and all claims, rights to claims, debts, liens, common or civil law or equitable causes of actions and penalties, whether sounding in contract or tort, constitutional, statutory, or regulatory causes of action and penalties ...". Whilst the Tribunal accepts the Respondent's submission that the 1995 Settlement Agreement

addressed for the most part contractual claims against TexPet, its object was not limited to contractual claims by the Respondent and Petro-Ecuador as co-contractors, but included expressly non-contractual claims by the Respondent in its other capacities with non-contractual rights and remedies.

79. The Tribunal notes that there is nothing in the express wording of the 1995 Settlement Agreement which contains any 'hold harmless' provision, indemnity or duty to defend by the Respondent or PetroEcuador in the event that TexPet was sued for any legal obligation or liability for Environmental Impact arising from the Consortium's operations. The release assumes that all claims falling within the scope of the release could only be made by the Respondent (with or without PetroEcuador), thereby making such provisions inapplicable to a non-contractual claim made by a third person in its own right. Moreover, there is a significant difference between a release and an indemnity for a State: the former is usually quantifiable at the time of the release and may cost the State little or nothing, whereas the latter, lying in the future and dependent upon a third person's claim, is usually unquantifiable and potentially costly to the State.
80. At the time of the 1995 Settlement Agreement, TexPet was facing separate claims from the Municipalities, four of which had brought legal proceedings against TexPet in Ecuador. The 1995 Settlement Agreement provided no relief to TexPet in regard to such claims. To the contrary, Annex A required TexPet to negotiate settlements with these Municipalities (which it did in the form of the 1996 Municipal and Provincial Releases, as recited above). The 1995 Settlement Agreement also makes no mention of the Aguinda Litigation then pending in New York, to which the Respondent was not a party.
81. From the express terms of the 1995 Settlement Agreement, therefore, the Tribunal concludes that the release for any non-contractual claim made by the Respondent was applicable to claims in which the Respondent was asserting its own rights (in one or more of its capacities) and not to claims made by other third persons acting independently of the Respondent and asserting rights separate and different from the rights of the Respondent.

82. *Article 5:* Under Article 5.1, TexPet and its then parent company (Texaco) were expressly named as “Releasees” in the 1995 Settlement Agreement. The Tribunal considers that the description of “all” the subsequent categories of unnamed Releasees was generally intended to be as broad as was then conceived to be possible, covering both all existing and future persons associated with TexPet who might conceivably be the subject of any environmental claim by the Respondent and PetroEcuador. That general intent, however, must yield to the specific contractual wording agreed by the signatory parties.
83. It is common ground between the Parties that the crucial wording appears in Article 5.1 of the 1995 Settlement Agreement: “principales y subsidiarias”. The Parties’ respective arguments have been summarised above, as also the conclusions reached by the Parties’ respective expert witnesses. It is ultimately a short point, in the Tribunal’s view; and it is therefore unnecessary for the Tribunal here to belabour it unduly.
84. In brief, the Tribunal accepts the grammatical, contextual and common-sense approach to this wording proposed by the Claimants and their two expert witnesses, Dr Barros and Dr Coronel; and it does not accept the approach taken by the Respondent and its expert witness, Professor Salgado, based on the application of Ecuadorian law on agency. The Tribunal also considers that if the issue had arisen at the time the 1995 Settlement Agreement was being signed, both sides would have reacted similarly, to the effect that the wording “principales y subsidiarias” was an obvious shorthand term, requiring no additional wording, for “las compañías principales y subsidiarias”; and that neither side would have suggested then that their chosen wording referred to a principal-agent relationship.
85. In the Tribunal’s view, the Respondent’s interpretation, as now advanced in this arbitration, would have been and remains materially inapposite, ineffective and inconsistent under the rules for contractual interpretation under Ecuadorian law listed in Paragraph 63(iv)(a)-(d) above. Moreover, with such a general intention attributable to the signatory parties to compromise such extensive classes of claims against such broad categories of potential defendants, with Texaco expressly included as TexPet’s existing parent, it would be an extreme oddity if the signatory parties had intended,

without the clearest wording, to exclude a future parent of TexPet because any future parent of TexPet (after Texaco) was the most obvious potential defendant with the deepest pockets. The Tribunal decides that there is no such objective intention evident from the terms of the 1995 Settlement Agreement.

86. Accordingly, for these reasons, the Tribunal decides that Chevron is a “Releasee” under Article 5.1 of the 1995 Settlement Agreement and Article IV of the Final Release. It follows from the Tribunal’s decision that Chevron is contractually privy to the 1995 Settlement Agreement; in other words Chevron is “party”, albeit not a signatory party such as TexPet.

87. *Article 9.4*: The next issue of interpretation arises from Article 9.4 of the 1995 Settlement Agreement, invoked by the Respondent. In the Tribunal’s view, this issue raises also a short point of contractual interpretation. For ease of reference, the Tribunal here sets out the Spanish text of Article 9.4, with the two relevant phrases highlighted: “No se deberá inferir que este Contrato conferirá beneficios *a terceros que no sean parte de este Contrato*, ni tampoco que proporcionará derechos *a terceros para hacer cumplir sus provisiones*”. (The Parties’ rival English translations of this Spanish text are set out above in Part B, paragraph 27).

88. The Tribunal decides that the wording of Article 9.4 addresses “third parties” who are not parties or part of the 1995 Settlement Agreement. That much is readily apparent from the first phrase in the Spanish version and indeed in both Parties’ English disputed translations. The issue only arises from the second phrase in Article 9.4 which, so the Respondent contends, addresses more generally third parties, here including third parties which are also party to or part of the 1995 Settlement Agreement described in the first phrase of Article 9.4.

89. In the Tribunal’s view, the second shorter phrase is intended as an abbreviated form of the first phrase. In other words, both phrases address third parties which are not party to or part of the 1995 Settlement Agreement. The Tribunal arrives at this interpretation as a matter of grammar, semantics and contextual consistency, but also, above all, as a matter of common sense and effectiveness under the rules for contractual interpretation under Ecuadorian law listed in Paragraph 63(iv)(a)-(d)

above. It would make no sense whatever to attribute to the signatory parties a common intent to include a person as a Releasee with ostensible contractual rights under Article 5 but then to exclude that same person from any benefit to enforce those rights under Article 9.4. If such an absurd result had been intended by the signatory parties, it would take much clearer wording than is expressed in Article 9.4; and, in the Tribunal's view, such wording is significantly absent to establish any such intention.

90. *Legal Ambiguity:* In the Tribunal's view, although highly disputed between the Parties at great length, the terms of Articles 1.12, 5.1, 5.2, 9.3 and 9.4 are ultimately not legally ambiguous under Ecuadorian law. The mere fact that the interpretation of a contractual term is disputed by parties and subjected to their exhaustive submissions and materials does not make it ambiguous. Accordingly the Tribunal does not invoke the rule of contractual interpretation relevant to ambiguity under Ecuadorian law listed in Paragraph 63(iv)(e) above, including Article 1582 of the Civil Code.¹³
91. *Decisions – Interpretation:* Accordingly, for these reasons, the Tribunal decides that Chevron, as a party to and “part of” the 1995 Settlement Agreement, can enforce its contractual rights under Article 5 of the 1995 Settlement Agreement as an unnamed Releasee (as also under Article IV of the Final Release), in the same way and to the same extent as TexPet as a signatory party and named Releasee. Moreover, the Tribunal decides that Chevron and TexPet can exercise those rights both defensively and offensively, as claimant or respondent in legal or arbitration proceedings seeking in both any appropriate relief under Ecuadorian law. In the Tribunal's view, nothing in the 1995 Settlement Agreement supports the contention that the manner in which those rights may be exercised is limited, as submitted by the Respondent.
92. *II Introduction - Legal Effect:* The Tribunal has here experienced several problems in deciding in full the respective submissions made by the Parties as to the legal effect of

¹³ Article 1582 of the Civil Code provides that, if none of its preceding rules of interpretation apply, ambiguous clauses shall be interpreted in a favour of the obligor. (In Spanish: “No pudiendo aplicarse ninguna de las reglas precedentes de interpretación, se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor. Pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella”).

the 1995 Settlement Agreement. Quite apart from the Parties' attempts to introduce into Track I submissions already reserved for Track II, the Tribunal considers that other parts of the Parties' submissions overlap significantly with issues falling under Track II and that still other parts originally intended for Track I can now only be decided by the Tribunal with Track II, particularly in the light of the Parties' written pleadings in Track II (which are still incomplete as at the date of this Partial Award). As Counsel for the Respondent rightly cautioned the Tribunal in its closing oral submissions at the November Hearing, there could be a risk of procedural unfairness if the Tribunal decided too much under Track I when one or more Parties were still pleading their full cases in Track II, particularly the Respondent [D3.625-626].

93. For these reasons, the Tribunal declines to decide in this Partial Award under Track I: (i) whether or not the Respondent has breached Article 5 of the 1995 Settlement Agreement and Article IV of the Final Release; and, if so, precisely what remedies are available to Chevron and/or TexPet against the Respondent in respect of any such breach (i.e. damages, declaratory relief or specific performance); (ii) whether or not the claims pleaded by the Lago Agrio Plaintiffs rest upon individual rights, as distinct from "collective" or "diffuse" rights (in whole or in part) and whether or not those claims are materially similar to the claims made by the Aguinda Plaintiffs in New York; and (iii) the specific effect of any changes in Ecuadorian law taking place after the execution of the 1995 Settlement Agreement and the 1998 Final Release, including the interpretation and application of the 1999 Environmental Management Act. These issues are hereby reserved to further decisions by the Tribunal in a later award; and none are decided by the Tribunal in this Partial Award.
94. (i) *Analysis – Legal Effect*: Nonetheless, there are certain other issues which the Tribunal can here fairly decide as to the legal effect of its interpretation of Article 5 of the 1995 Settlement Agreement, as regards Chevron and the Respondent, as at the time of its execution by the signatory parties. (The positions of TexPet and PetroEcuador, whilst not ignored, can here be set aside for present purposes; and, as already indicated, no separate consideration is here required as regards Article IV of the 1998 Final Release).

95. First, the Tribunal decides that the release granted to Chevron by the Respondent under Article 5 covers claims made by the Respondent (with or without PetroEcuador). As worded, the release does not extend to any claims made by third persons in respect of their own individual rights separate from the Respondent under Ecuadorian or other laws. In the Tribunal's view, this factor is not materially disputed by the Parties. The Claimants recognise that the release does not affect such individual rights, both for personal harm claimed by an individual and also the personal claims made by the identifiable Aguinda Plaintiffs in New York.
96. Second, the Tribunal decides that the release in Article 5 by the Respondent does not amount, from its own wording and under Ecuadorian law, to a settlement with a general "erga omnes" effect as res judicata upon any claims made by third persons in respect of their own individual rights separate from the Respondent under Ecuadorian or other laws. Under Ecuadorian law, in order to settle a claim, a person must have the ability to dispose of that claim; and the Respondent had no right to dispose of such an individual claim by a third person: Articles 2349 and 2354 of the Civil Code.¹⁴ This issue is different from and not to be confused with the next issue regarding the capacity of the Respondent in regard to "diffuse" or "collective" rights at the time of the 1995 Settlement Agreement.
97. The words "diffuse" and "collective" do not appear in the 1995 Settlement Agreement. However, as recorded in Paragraph 63 above, the Parties' expert witnesses agree that the laws of Ecuador when the 1995 Settlement Agreement was executed are incorporated into the Settlement Agreement pursuant to Article 7, number eighteen, of the Civil Code.¹⁵ In their joint expert report dated 7 August 2012, Professors Le Chatelier and Oquendo agreed the following legal definition of diffuse rights: "Diffuse rights are indivisible entitlements that pertain to the community as a whole,

¹⁴ Article 2349 of the Civil Code provides that the only person who can settle a claim is the person who is able to dispose of the objects covered by the settlement (In Spanish: "*No puede transigir sino la persona capaz de disponer de los objetos comprendidos en la transacción*"). Article 2354 of the Civil Code provides that a settlement regarding the rights of others is not valid (In Spanish: "*No vale la transacción sobre derechos ajenos o sobre derechos que no existen*").

¹⁵ Article 7 of the Civil Code provides, in relevant part: "*La ley no dispone sino para lo venidero: no tiene efecto retroactivo; y en conflicto de una ley posterior con otra anterior, se observarán las reglas siguientes: En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración*".

such as the community's collective right to live in a healthy and uncontaminated environment ...". Although these two experts cite as references (inter alia) Ecuadorian laws subsequent to 1995 (including the 1999 Environmental Management Act), the Tribunal considers that this agreed definition is equally appropriate at the time when the 1995 Settlement Agreement was made as regards Ecuadorian law incorporated into the 1995 Settlement Agreement. For present purposes, the Tribunal sees no material distinction between the terms "diffuse" and "collective" rights, here preferring to use the former term only.

98. (ii) *Article 19-2*: This issue of diffuse rights concerns, above all, the nature of the legal rights expressed in Article 19-2 of the Ecuadorian Constitution in force when the 1995 Settlement Agreement was made by the signatory parties. That constitutional provision is expressly cited in Article 5.2 of the 1995 Settlement Agreement, as well as incorporated under Ecuadorian rules of contractual interpretation (for its relevant Spanish text and English translation, see Part B above).
99. Although Article 19-2 is not framed in terms that explicitly confer any right of action, it is common ground between the Parties that it did confer a right to a pollution-free environment guaranteed by "the State". Constitutionally, the "State" in Article 19-2 is of course the Respondent. Although there is no record (as at 1995) of the Respondent ever itself resorting to legal proceedings to make an environmental claim against any person pursuant to Article 19-2, it is clear from the wording of Article 5.2 of the 1995 Settlement Agreement that such a possibility was objectively considered to exist by its signatory parties (including the Respondent), however remote the likelihood of it occurring in practice. Moreover, the Respondent's expert witness, Professor Eguiguren, acknowledged in his oral testimony at the November Hearing that the Respondent could make such a claim in 1995 [D1.208-209]. Hence, the Tribunal concludes that Article 5 was intended to preclude the Respondent from itself making any claim against a Releasee (now including Chevron) under Article 19-2 of the Constitution (or its subsequent constitutional equivalent).
100. On the other hand, as decided above, the contractual wording also records an intention by the signatory parties not to affect claims made separately by other third persons with their own individual rights; nor could it affect those separate third-person rights

as a matter of Ecuadorian law: see Article 2363 of the Civil Code.¹⁶ The Tribunal therefore concludes that, as at 1995, such an individual claiming damages for personal harm remained free to do so, notwithstanding the Respondent's release in Article 5, even where that person invoked Article 19-2 of the Constitution in support of an individual claim for damages in respect of personal harm (actual or threatened) separate from the Respondent. The Tribunal notes the decision in the Gutiérrez case of 29 September 1993 where the individual plaintiff was awarded damages against the defendant pig farmer for personal harm to him, his wife and their property based (inter alia) upon a claim under Article 19-2 of the Constitution.¹⁷

101. However, the issue is not whether such an individual could make such a claim in respect of his or her personal harm, but rather whether such an individual could make a claim in respect of harm arising out of the alleged violation of a diffuse right under Article 19-2 of the Constitution without claiming to have suffered any personal harm. The Tribunal considers that, as at 1995, such a claim by such an individual was not possible under Ecuadorian law, that cause of action being confined under Article 19-2 to the Respondent alone. It is here helpful to set out the rival approaches taken by the Parties' respective expert witnesses, as largely recorded in their joint expert report dated 7 August 2012.
102. In summary, the Claimants' experts (Dr Barros, Dr Coronel, Professor Oquendo and Dr Romero) testified that the constitutional right under Article 19-2 was a diffuse and indivisible right because the owner of that right was the entire community of Ecuadorian citizens (not individuals or groups of individuals); the Ecuadorian Government asserted this right for the benefit of the entire community of Ecuadorian citizens in the 1995 Settlement Agreement, in the exercise of the Respondent's duty to vindicate the right of its citizens to live in an environment free from contamination and to foster the preservation of nature; and, accordingly, the 1995 Settlement

¹⁶ Article 2363 of the Civil Code provides that a settlement shall only be effective as between the parties to such settlement (In Spanish: "*La transacción no surte efecto sino entre los contratantes. Si son muchos los principales interesados en el negocio sobre el cual se transige, la transacción consentida por uno de ellos, no perjudica ni aprovecha los otros; salvo, empero, los efectos de la novación, en el caso de solidaridad*"). Article 297 of the Code of Civil Procedure requires the common identity of (i) parties, (ii) causa petendi (as to facts and legal basis); and (iii) object.

¹⁷ The Angel Gutiérrez case of 29 September 1993 (ibid).

Agreement (with the Final Release) extinguished any possible environmental claim against the Releasees arising from the alleged violation of this diffuse right under Article 19-2, whether made by the Respondent or any third person.

103. In summary, the Respondent's expert witnesses (Professor Eguiguren, supported by Professor Le Chatelier), whilst acknowledging that a diffuse right was indivisible, testified that, in order to settle any right, the settling party must have the capacity to dispose of that right under Ecuadorian law; the Ecuadorian Government acted in the 1995 Settlement Agreement to settle only its own rights arising from the 1973 Concession Agreement; the Government did not have any capacity: (i) to dispose of the rights of individuals or (ii) to represent individuals for the purpose of settling in their name rights conferred upon them by Ecuadorian law, including rights under Article 19-2 of the Constitution; and for this purpose the nature of the right is irrelevant (i.e. whether diffuse or otherwise) because a settlement, according to Ecuadorian law, can affect only the parties to that settlement and cannot affect the rights of third persons.
104. As already noted above, the first of these propositions concerning 'individual' rights is common ground between the Parties' expert witnesses and is not disputed by the Claimants. It is the second proposition concerning Article 19-2 which divides the Parties' expert witnesses.
105. From the materials adduced by the Parties and their expert witnesses in these arbitration proceedings, the Tribunal concludes that the diffuse and indivisible right under Article 19-2 of the Constitution was the same before and after the 1995 Settlement Agreement. In particular, Professor Eguiguren testified at the November Hearing that "... the right remains the same. The right to live in a healthy environment is the same of [in] 1995. In reality, since 1983, when it was introduced in the Ecuadorian Constitution, it's the same of [in] 1998 and 2008" [D1.199]. What changed under Ecuadorian law after 1995 was the legal standing of a private individual to bring a claim under Article 19-2 asserting a diffuse constitutional right (not being a claim in respect of that individual's personal harm). That new legal standing was subsequently confirmed by the 1999 Environmental Management Act.

106. In the Tribunal's view, under Ecuadorian law as at the time when the 1995 Settlement Agreement was executed (i.e. before the 1999 Act), only the Respondent could bring a diffuse claim under Article 19-2 to safeguard the right of citizens to live in an environment free from contamination. At that time, no other person could bring such a claim. No instance of the Respondent bringing or settling such a claim (other than this case) and no decisive provision of Ecuadorian law was brought to the attention of the Tribunal. Nonetheless, it must follow from the circumstances prevailing in 1995 that the Respondent, and only the Respondent, had the legal capacity to make and settle a diffuse claim under Article 19-2. If the Respondent could not make and then settle a diffuse claim under Article 19-2, no-one else could. The Tribunal is therefore persuaded by the analysis submitted by the Claimants' expert witnesses on this point, namely that in 1995 the Respondent (acting by its Government) could settle a diffuse claim under Article 19-2 "forever" against the Releasees; and that accordingly no such diffuse claim could be made in the future against any Releasee.
107. After 1995, the Tribunal considers that the same situation prevailed: the right to make an environmental claim based upon the diffuse right under Article 19-2 against the Releasees remained settled "forever". The new factor, confirmed by the 1999 Environmental Management Act, that one or more private individuals now had standing to bring a claim asserting diffuse rights could not revive the diffuse right under Article 19-2 which had already been extinguished by the 1995 Settlement Agreement. It is not juridically possible for a person to exercise a right which no longer exists, even if, were that right to remain in existence, that person has newly acquired the right to exercise it. As agreed by the Parties' experts, that diffuse right under Article 19-2 was "indivisible": it was either settled in full or not at all. The Tribunal has rejected the latter possibility; and it decides upon the former. It rejects entirely the third possibility that the same diffuse right in Article 19-2 can exist in separate parts, to be exercised by multiple claimants at different times with successive diffuse claims, thereby making any effective final settlement or adjudication of such claims illusory.
108. *(iii) Decisions - Legal Effect:* Accordingly, for these reasons, the Tribunal concludes that, under Ecuadorian law, Article 5 of the 1995 Settlement Agreement and Article IV of the Final Release preclude any claim by the Respondent against any Releasee

invoking the diffuse constitutional right under Article 19-2 of the Constitution, but that these releases also preclude any third person making a claim against a Releasee invoking the same diffuse constitutional right under Article 19-2, not being a separate and different claim for personal harm (whether actual or threatened).

109. It will be noted that the Tribunal has not considered the other statutory provisions listed in Article 5.2 of the 1995 Settlement Agreement, particularly the Decree No. 374, the Water Act of 1973 and Decree No. 2144. The Tribunal has heard much less about these provisions so far; and it is therefore reluctant to make any final decisions in their regard before satisfying itself that there are no material differences between the nature of the legal rights under these provisions and the rights under Article 19-2. The Tribunal will if necessary request further submissions from the Parties on this point.
110. Lastly, the Tribunal has not here decided the nature and scope of popular actions under Articles 990 and 2236 of the Civil Code. From the Parties' expert witness reports, there appears to be common ground that a claimant could not bring any environmental claim as a popular action without (inter alia) claiming actual or threatened personal harm. The Tribunal has again heard much less about these popular actions (both before and after the 1995 Settlement Agreement); and, whilst it seems at present that these actions are unlikely to be decisive one way or the other in this case, the Tribunal again prefers to defer its decision for the time being. Similarly, the Tribunal will if necessary request further submissions from the Parties on these popular actions.

PART E: THE OPERATIVE PART

- 111. This Partial Award, although separately signed by the Tribunal’s members on three signing pages, constitutes a “Partial Award” signed by the three arbitrators under Article 32 of the UNCITRAL Arbitration Rules.**
- 112. For the reasons set out above, the Tribunal finally decides and awards as follows in Track I of these arbitration proceedings:**
- (1) The First Claimant (“Chevron”) and the Second Claimant (“TexPet”) are both “Releasees” under Article 5.1 of the 1995 Settlement Agreement and Article IV of the 1998 Final Release;**
 - (2) As such a Releasee, a party to and also part of the 1995 Settlement Agreement, the First Claimant can invoke its contractual rights thereunder in regard to the release in Article 5.1 of the 1995 Settlement Agreement and Article IV of the 1998 Final Release as fully as the Second Claimant as a signatory party and named Releasee;**
 - (3) The scope of the releases in Article 5 of the 1995 Settlement Agreement and Article IV of the 1998 Final Release made by the Respondent to the First and Second Claimants does not extend to any environmental claim made by an individual for personal harm in respect of that individual’s rights separate and different from the Respondent; but it does have legal effect under Ecuadorian law precluding any “diffuse” claim against the First and Second Claimants under Article 19-2 of the Constitution made by the Respondent and also made by any individual not claiming personal harm (actual or threatened); and**

- (4) Save as aforesaid, the Tribunal does not here decide (one way or the other) any part of the formal relief claimed by the Parties respectively in regard to Track I, reserving to itself its full powers and discretion to do so in one or more later awards.

PLACE OF ARBITRATION: THE HAGUE, THE NETHERLANDS

DATE: 17 SEPTEMBER 2013

THE TRIBUNAL:

Dr Horacio A. Grigera Naón:

Professor Vaughan Lowe;

V.V. Veeder (President:)

V.V. Veeder

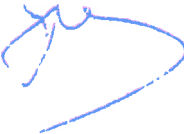

- (4) Save as aforesaid, the Tribunal does not here decide (one way or the other) any part of the formal relief claimed by the Parties respectively in regard to Track I, reserving to itself its full powers and discretion to do so in one or more later awards.

PLACE OF ARBITRATION: THE HAGUE, THE NETHERLANDS

DATE: 17 SEPTEMBER 2013

THE TRIBUNAL:

Dr Horacio A. Grigera Naón:



Professor Vaughan Lowe;

V.V. Veeder (President):



- (4) Save as aforesaid, the Tribunal does not here decide (one way or the other) any part of the formal relief claimed by the Parties respectively in regard to Track I, reserving to itself its full powers and discretion to do so in one or more later awards.

PLACE OF ARBITRATION: THE HAGUE, THE NETHERLANDS

DATE: 17 SEPTEMBER 2013

THE TRIBUNAL:

Dr Horacio A. Grigera Naón:



Professor Vaughan Lowe:



V.V. Veeder (President:)